

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA**

**Competencia y Admisibilidad para juzgar acciones
armadas fronterizas y transfronterizas entre Nicaragua y
Honduras, fallo de la Corte Internacional de Justicia, 20
de diciembre de 1988**

Disertación para la obtención de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas

Sofía Benavides Ochoa

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	4
1. LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.....	5
a. Antecedentes	5
b. Corte Internacional de Justicia en la actualidad	7
i. Organización de la Corte.....	7
ii. Requisitos de los Magistrados.....	8
iii. Presidencia y Vicepresidencia.....	9
iv. Jueces ad hoc.....	10
v. La Secretaría.....	10
vi. Competencia de la Corte.....	11
vii. Procedimiento	14
1. Acciones.....	15
2. Fases.....	15
viii. Fallo	17
ix. Recursos.....	18
c. Opiniones Consultivas	19
2. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO HONDURAS - NICARAGUA	21
a. Revolución Sandinista	21
i. Frente Sandinista de Liberación Nacional.....	21
ii. La Contra	23
iii. Ataques de la Contra y sus consecuencias	24
iv. Declaraciones desde Honduras	27
v. Negociaciones de Paz y derrotas electorales.....	27
vi. Obligaciones Internacionales.....	29
b. Antecedentes jurídicos de los conflictos presentados por Nicaragua ante la CIJ.....	29
i. Caso: actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua	29
ii. Caso: Acciones armadas fronterizas y transfronterizas entre Nicaragua y Honduras	31

3.	FALLO DE 20 DE DICIEMBRE DE 1988, COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD	34
a.	Competencia o Jurisdicción	34
i.	<i>La competencia según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia</i>	36
ii.	<i>La competencia según el Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas</i>	38
iii.	<i>Análisis del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia el 20 de diciembre de 1988 (Nicaragua vs. Honduras)</i>	39
iv.	<i>Análisis de las excepciones de competencia presentadas por las partes.</i>	45
1.	<i>Relación con el artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la Corte y sus declaraciones</i>	45
2.	<i>Pacto de Bogotá, artículos XXI y XXXII</i>	51
3.	<i>Interpretación del artículo 36 párrafo 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y el artículo XXXI del Pacto de Bogotá</i>	56
b.	Admisibilidad de la Corte Internacional de Justicia.....	58
i.	<i>Análisis del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia el 20 de diciembre de 1988 entre Nicaragua y Honduras, excepciones de admisibilidad</i>	58
1.	<i>“La solicitud es políticamente inspirada y artificial”</i>	58
2.	<i>“La aplicación es vaga y las alegaciones que figuran en ella no están debidamente detalladas”</i>	60
3.	<i>Pacto de Bogotá, artículo II</i>	61
4.	<i>Pacto de Bogotá, artículo IV</i>	63
4.	Conclusiones.....	65
5.	Bibliografía.....	68

INTRODUCCIÓN

Los conflictos armados son de mucha importancia y trascendencia para los países por las consecuencias negativas que estos acarrearán y su incidencia a nivel mundial; es por esto que es preciso hacer un estudio serio y profundo de casos que han sido juzgados por la Corte Internacional de Justicia para aportar a la doctrina del Derecho Internacional, y así, justificar, examinar y reforzar los fundamentos y argumentos utilizados al momento de dictar los fallos, con el objetivo de sentar precedentes en relación a la competencia de los órganos internacionales, tales como la Corte Internacional de Justicia, cuyo objetivo principal es la solución de controversias entre Estados y la admisibilidad de las aplicaciones presentadas por los Estados partes; éste es el caso de Nicaragua y Honduras que han acudido en diferentes ocasiones a las instancias del Derecho Internacional Público para lograr la paz, elemento fundamental para la armonía de los pueblos.

Es por esto que se decidió realizar un estudio – análisis de varios casos sentenciados por la Corte, entre los cuales está el presente, ya que, al no ser un hecho único en su especie, por haber muchos conflictos de este tipo entre los Estados, es interesante y necesario analizar con profundidad el fallo en donde se determinó la competencia y admisibilidad de la Corte para tratar los conflictos armados fronterizos y transfronterizos entre Nicaragua y Honduras, para que pueda ser tomada como referencia en conflictos similares.

Este estudio aportará al Derecho Internacional y beneficiará al Centro de Estudios del Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

1. LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

a. Antecedentes

El Tribunal Permanente de Justicia Internacional fue el primer órgano judicial internacional creado por el Pacto de la Sociedad de Naciones¹ el 24 de abril de 1919 en la Conferencia de París, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial²; esto con el objetivo de fomentar la cooperación entre las naciones para garantizar la paz y la seguridad, a través de la prevención de conflictos mediante arreglos pacíficos; además fue una estrategia para comprometer a los Estados a no recurrir a la realización de actos de guerra en un gran esfuerzo por el cumplimiento de la justicia, el honor, y todo lo que vaya acorde para la paz del mundo³. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial terminó con éste primer organismo judicial internacional.

Posteriormente, se realizó la Conferencia de San Francisco en donde se aprobó la Carta de las Naciones Unidas el 25 de junio de 1945; entre otras cosas, se debatió sobre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, como nuevo órgano judicial que reemplazaría al Tribunal Permanente de Justicia el 18 de abril de 1946.

¹ *“El sistema de la Sociedad de Naciones se concretaba en que ésta confería mandatos a los países que heredaban las colonias despojadas de Alemania y Turquía,... estos mandatos limitaban la soberanía de los pueblos propietarios, obligándoles a informar cada año a la Sociedad de las Naciones sobre las medidas adoptadas con el objetivo de preparar a las poblaciones administradas para la independencia.”* Juan Carlos Ocaña, Mandatos de la Sociedad de Naciones. Internet. www.historiasiglo20.org/GLOS/mandatos.htm Acceso: 11 de octubre de 2010.

² Según el artículo 14 del Pacto de la Sociedad de Naciones: *“El Consejo queda encargado de preparar un proyecto de Tribunal Permanente de Justicia Internacional y de someterlo a todos los miembros de la Sociedad. El Tribunal entenderá en todos los desacuerdos de carácter internacional que las partes sometan a su examen. Emitirá también dictámenes sobre cualquier diferencia o asunto cuyo examen le confíe la Asamblea o el Consejo.”* Sergio Guerrero Verdejo, Los Tratados como Fuente de Derecho, Aragón, Plaza y Valdés, Universidad Nacional Autónoma de México. Textos de Ciencias Políticas N° 13, pág. 266-267. A partir de la Segunda Guerra Mundial el Tribunal dejó de funcionar, en ese momento 50 de los 68 Estados independientes formaban parte de la Comunidad Internacional.

³ *Ibíd.* pág. 259-261.

En la Carta de las Naciones Unidas⁴ se consideró como órgano principal a la Corte Internacional de Justicia⁵ y, anexa a ésta, se encuentra el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, mismo que fue adoptado en 1945 para regular las funciones y atribuciones de la Corte.

Es importante mencionar que en esta Conferencia los Estados llegaron a la siguiente conclusión: *“los estados miembros no están obligados a reconocer la jurisdicción de ésta Corte, pero pueden voluntariamente declarar su sometimiento a ella”*⁶, haciendo énfasis en la libre determinación de los pueblos y en su soberanía para decidir por ellos mismos si reconocen o no la jurisdicción de la Corte para tratar sus divergencias con otros Estados.

También, se aclaró la continuidad jurisprudencial que debía existir entre el Tribunal Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia; tal es así que en el Reglamento de la Corte se determinó que dentro de las funciones del Secretario está:

*... también a su cuidado los archivos de la Corte Permanente de Justicia Internacional confiados a la actual Corte por decisión de la Corte Permanente en octubre de 1945 (C.I.J. Annuaire 1946-1947, p. 20), y los archivos del juicio de los grandes criminales de guerra ante el Tribunal militar internacional de Nuremberg (1945-1946), que este Tribunal confió a la Corte en su decisión del 1° de octubre de 1946...*⁷

Por otro lado, con la creación del nuevo órgano judicial se decidió cambiar el nombre de Tribunal Permanente de Justicia Internacional a Corte Internacional de Justicia debido que ésta denominación contenía imprecisiones en cuanto a la palabra *“Permanente”*, puesto que se argumentó que todo órgano judicial es permanente, mientras que en

⁴ La Carta de las Naciones Unidas trata el tema de la Corte Internacional de Justicia en el capítulo XIV desde el artículo 92 al 96.

⁵ Según el artículo 7 párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia es considerada como parte de los órganos principales de las Naciones Unidas conjuntamente con la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría.

⁶ Historia de las Naciones Unidas - Conferencia de San Francisco, Internet: www.un.org Acceso: 10 de octubre de 2010.

⁷ Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, artículo 26 literal n, nota al pie 1.

cuanto a la frase “*Justicia Internacional*” se determinó que no era correcto calificar de internacional a la justicia⁸.

b. Corte Internacional de Justicia en la actualidad

Actualmente, la Corte Internacional de Justicia tiene su sede en el Palacio de la Paz en La Haya, Países Bajos, sin embargo, puede funcionar, reunirse y sesionar en cualquier otro lugar cuando lo considere necesario⁹.

Es el único Tribunal Internacional con competencia general (*ratione materiae*) y universal (*ratione personae*), es decir, la Corte se encarga de decidir de acuerdo al Derecho Internacional sobre las controversias de orden jurídico que se crearen entre Estados parte, es decir, sobre si la Corte es competente o si el caso – conflicto es admisible, así como sobre el fondo del tema; también emite opiniones consultivas sobre temas jurídicos que son planteados por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o por agencias especializadas que hayan sido autorizadas por la Asamblea General de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas.

i. Organización de la Corte

La Corte Internacional de Justicia está conformada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de una nómina de candidatos propuestos con anterioridad por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje, mismos que han sido organizados alfabéticamente por el Secretario General de las Naciones Unidas¹⁰; ningún grupo de nacionales podrá proponer más de cuatro candidatos y el número de la nómina no podrá ser mayor que el doble del número de plazas vacantes (Estatuto de la Corte artículo 5 párrafo 2); las votaciones se realizan de forma

⁸ José Antonio Pastor Ridruejo, Curso de Derecho Internacional Público y Organismos Internacionales, Madrid, ed. Tecnos, 1980, pág. 722-723.

⁹ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 22 numeral 1.

¹⁰ *Ibíd.* artículo 4 numeral 1 y artículo 7 numeral 1.

independiente y los candidatos que obtengan la mayoría de votos en ambas elecciones¹¹ accederán a ocupar el cargo de magistrado de la Corte.

ii. Requisitos de los Magistrados

Entre los requisitos para ser elegidos magistrados de la Corte Internacional de Justicia están sus méritos, gozar de alta consideración moral, reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus países de origen y ser bastos conocedores en materia de Derecho Internacional.¹²

Es importante mencionar que uno de los objetivos de la Corte Internacional de Justicia es que se encuentren representados los principales sistemas jurídicos del mundo y las grandes civilizaciones¹³ para poder representar de mejor manera a las civilizaciones del mundo.

En este punto, es importante enfatizar una inconsistencia entre los artículos del Estatuto de la Corte, puesto que en el artículo 2 se menciona que la nacionalidad no es tomada en cuenta para la elección de los magistrados, sin embargo, en el artículo 3 numeral 1 dice “no podrá haber dos que sean nacionales del mismo Estado”, en el artículo 5 numeral 2 del mismo Estatuto dice “Ningún grupo podrá proponer más de cuatro candidatos, de los cuales no más de dos serán de su misma nacionalidad...”, en el artículo 10 numeral 3 dice “En el caso de que más de un nacional del mismo Estado obtenga una mayoría absoluta de votos tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, se considerará electo el de mayor edad”; lo que nos demuestra de forma contraria a lo que se dice si se tiene especial cuidado para que no se repitan las nacionalidades de los magistrados elegidos, a pesar de haber declarado que la nacionalidad no es un requisito para llegar a ser magistrado de la Corte Internacional de Justicia.

¹¹ Procedimiento llamado “doble escrutinio” José Antonio Pastor Ridruejo, Curso de Derecho Internacional Público y Organismos Internacionales, Madrid, ed. Tecnos, 1980, pág. 722-723

¹² Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 2.

¹³ *Ibíd.*, artículo 9.

iii. Presidencia y Vicepresidencia

Según el artículo 21 del Estatuto, la Corte en pleno tiene la potestad de elegir a su Presidente, Vicepresidente y Secretario, además dispondrá el nombramiento de los demás funcionarios que se requieran.

El Presidente y Vicepresidente serán elegidos por un período de 3 años con posibilidad a ser reelegidos¹⁴. Según el artículo 11 del Reglamento de la Corte, si el Presidente saliente continúa siendo miembro de la Corte, la elección se llevará a cabo bajo su dirección; y, si ha cesado de ser miembro de la Corte o se encuentra impedido de actuar, la elección será dirigida por el miembro de la Corte que se encuentre ejerciendo la Presidencia según el orden de precedencia.

La votación es secreta y el miembro de la Corte que resulte elegido, por obtener la mayoría de los votos de los miembros, será declarado elegido y tomará posesión de sus funciones inmediatamente. El Vicepresidente será elegido en la misma sesión o la siguiente según el mismo procedimiento utilizado para elegir al Presidente.¹⁵ El Presidente representa a la Corte y tiene la obligación de residir en la sede de la Corte; y, al igual que el Secretario¹⁶, su función es dirigir los trabajos, servicios, debates y las vistas¹⁷. Entre las funciones del Presidente está la de dirigir sus trabajos y supervisar la administración de la Corte Internacional de Justicia, según el Reglamento de la Corte artículo 12.

Es importante mencionar que el Estatuto de la Corte prevé que en el caso de que algún miembro de la Corte y el Presidente estuvieren en desacuerdo, se someterá la decisión para que sea resuelta por el pleno de la Corte.¹⁸

En el caso de que existan empates al momento de tomar decisiones, el Presidente o el magistrado que se encuentre en su reemplazo, tendrá voto dirimente según el artículo 56 numeral 2 del Estatuto de la Corte.

¹⁴ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 21 párrafo 1.

¹⁵ Reglamento de la Corte, artículo 11 numerales 2 y 3.

¹⁶ Óp. Cit., artículo 22 párrafo 2.

¹⁷ Óp. Cit., artículo 45.

¹⁸ Óp. Cit., artículo 24 numeral 3.

iv. Jueces *ad hoc*

Se llaman jueces *ad hoc* a los jueces que la Corte incorpore en su seno y que no hayan sido elegidos por el procedimiento especificado en el Estatuto y Reglamento de la Corte para ser magistrados de la misma, estos pueden ser una o más personas en relación al artículo 31 del Estatuto de la Corte y artículo 1 numeral 2 del Reglamento de la Corte; estarán a disposición de la mencionada Corte y participarán en igualdad de condiciones con los otros jueces en asuntos específicos¹⁹.

Según el artículo 31 numeral 2 del Estatuto, la Corte podrá incluir entre los magistrados del conocimiento uno de la nacionalidad de una de las partes, cualquier otra parte podrá designar a una persona de su elección para que tome asiento en calidad de magistrado y, según el numeral 3 del mismo artículo, si la Corte no incluyere entre los magistrados del conocimiento un magistrado de la nacionalidad de las partes, cada una de éstas podrá designar uno de acuerdo con el numeral 2 antes mencionado.

Para poder acceder a ser jueces *ad hoc* deberán cumplir con las condiciones requeridas por los artículos 2, 17 (párrafo 2), 20 y 24 del Estatuto, además participarán con las mismas funciones y atribuciones que los miembros de la Corte²⁰

Por otro lado, según el Reglamento de la Corte, no se tomará en cuenta a los jueces *ad hoc* para el quórum²¹, y, como mencionamos anteriormente, el juez *ad hoc* puede ser de nacionalidad distinta a la parte que lo designe (artículo 35 del Reglamento de la Corte).

v. La Secretaría

La Secretaría de la Corte estará compuesta por un Secretario, un Secretario Adjunto y los funcionarios que sean necesarios. El Secretario de la Corte Internacional de Justicia y el

¹⁹ Reglamento de la Corte, artículo 7 numeral 2.

²⁰ Óp. Cit., artículo 31 numeral 6.

²¹ Reglamento de la Corte, artículo 20 párrafo 3.

Secretario Adjunto serán elegidos por un período de siete años con opción a ser reelegidos²².

Las funciones del Secretario de la Corte están definidas en el artículo 26 del Reglamento de la Corte; es necesario enfatizar que todas las comunicaciones dirigidas a la Corte serán enviadas al Secretario, especialmente si son por escrito.

Según el artículo 71 del Reglamento de la Corte, es deber del Secretario levantar un acta taquigráfica por cada audiencia que se realice en el idioma o idiomas oficiales de la Corte y que se hayan usado en la mencionada audiencia. Si se utilizare un idioma distinto a los oficiales, el Secretario se encargará de levantar el acta en uno de los idiomas oficiales de la Corte; las partes deberán entregar un documento con anterioridad y en uno de los idiomas oficiales en donde se indique lo que se va a tratar para que sea tomado en cuenta en el acta, estas actas serán publicadas por la Corte.

vi. Competencia de la Corte

Pueden recurrir a la Corte todos los miembros de las Naciones Unidas²³, así como los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas, estos últimos pueden acceder a ser parte según el Estatuto de la Corte, en las condiciones que determine la Asamblea General o por recomendaciones del Consejo de Seguridad (Carta de las Naciones Unidas artículo 93 párrafo 2), tomando en cuenta las disposiciones especiales de los tratados vigentes y siempre precautelando la igualdad ante la Corte (Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 35 párrafo 2).

Es importante recalcar que ninguna persona natural o jurídica podrá acceder a la Corte Internacional de Justicia, ni por la vía consultiva menos por la contenciosa. Es decir, la jurisdicción de la Corte es bastante amplia, se extiende a todos los litigios que los

²² *Ibíd.*, los artículos que tratan este tema son: 22 párrafo 1, 23, 25 párrafo 1, 28 párrafo 1, en concordancia con el artículo 21 párrafo 2 del Estatuto de la Corte.

²³ Carta de las Naciones Unidas, artículo 93 párrafo 1 “Todos los miembros de las Naciones Unidas son *ipso facto* partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia” en concordancia con el artículo 34 párrafo 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

Estados parte sometan a su consideración y a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas, en tratados y convenciones vigentes²⁴.

Por otro lado, los Estados partes del Estatuto de la Corte pueden declarar en cualquier momento que reconocen de forma *ipso facto* y sin necesidad de convenio especial la jurisdicción de la Corte frente a cualquier Estado que haya aceptado la misma obligación para cualquier controversia, según el artículo 36 numeral 2, que dice:

Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:

- a) La interpretación de un tratado;*
- b) Cualquier cuestión de derecho internacional;*
- c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional;*
- d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional”.*

Mientras que en el mismo artículo 36 numeral 6 del Estatuto dice: ***“En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”*** *la negrita es mía*, es decir, la Corte tiene la facultad de tomar decisiones respecto de las controversias que le sean sometidas para su respectivo análisis y determinación, a través de la aplicación de las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho, las decisiones judiciales y las doctrinas de los juristas de mayor renombre de los diferentes países como medio complementario para la determinación de las reglas jurídicas internacionales (artículo 38 numeral 1 del Estatuto de la Corte).

El mismo Estatuto indica que los Estados que se sometieron a la jurisdicción de la Sociedad de las Naciones o, en su defecto, a la Corte Permanente de Justicia Internacional, será sometido a la Corte Internacional de Justicia²⁵; en este punto es importante mencionar que ni en el Tribunal Permanente de Justicia Internacional ni en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se habla de un periodo de vigencia o

²⁴ *Ibíd.*, artículo 36 párrafo 1.- “La competencia de la Corte se extiende a todo lo que las partes le sometan y a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes”.

²⁵ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 37.

duración de éste acto en donde los Estados se someten a la jurisdicción de la Corte, lo que posteriormente será alegado por la República de Honduras en el proceso de admisibilidad y competencia de la Corte para tratar el caso *Conflictos armados fronterizos y transfronterizos entre Nicaragua y Honduras*.

Según la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 36, cuando el Consejo de Seguridad tome en consideración, para la solución de conflictos, la vía judicial por considerar que la controversia es susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, ésta debe ser sometida a la Corte Internacional de Justicia de acuerdo a lo que determina su Estatuto.

Por otra parte, como lo menciona el Estatuto de la Corte en su artículo 65 párrafo 1 y en la Carta de las Naciones Unidas artículo 96 párrafos 1 y 2 la Corte, tanto en su esfera contenciosa como en la consultiva, es únicamente competente para resolver o emitir criterios jurídicos, por tanto, quedan excluidos los conflictos o controversias y solicitudes de consulta que tengan que ver con cuestiones políticas o de hecho. La Corte deliberará en privado y los detalles de estas reuniones permanecerán en secreto, estarán presentes los jueces y, si procede, los asesores, así como el Secretario o su adjunto y aquellos funcionarios de la Secretaría de la Corte cuya presencia sea requerida; no se permitirá la presencia de ninguna otra persona si no es con la autorización de la Corte.²⁶, para que la Corte pueda emitir su decisión primero debe determinar su competencia en el respectivo caso.

Cualquier excepción a la competencia o admisibilidad de la Corte frente a un caso específico debe ser solicitada por escrito lo antes posible, el procedimiento referente al fondo quedará suspenso mientras se decida sobre la excepción solicitada, es por esto que los argumentos de las partes deberán ser bien fundamentados, deberán tener documentos de apoyo,²⁷ soporte y deberán ser entregados a más tardar en el plazo de 3 meses a partir de la presentación de la memoria, mientras que “*cualquier excepción opuesta por una parte que no sea el demandado deberá depositarse dentro del plazo*

²⁶ Según el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia artículo 21 párrafos 1 y 2.

²⁷ *Ibíd.*, artículo 79 numerales 4 y 5.

*fijado para el depósito del primer alegato escrito de esa parte*²⁸; luego de la presentación de la solicitud, el Presidente se reunirá y realizará consultas con las Partes, para posteriormente, la Corte decidir sobre si existe o no la necesidad de pronunciarse sobre la competencia y admisibilidad, este pronunciamiento debe ser por separado²⁹.

En el caso que la Corte lo decida, las partes deberán presentar sus alegatos, ya sea en cuestión de admisibilidad o de competencia, en los plazos y orden fijados por la Corte³⁰; en este momento es importante recalcar la diferencia entre admisibilidad y competencia, mientras admisibilidad significa aceptar que una causa pueda ser tratada y analizada por la Corte de acuerdo a sus funciones y atribuciones, la competencia, según el Diccionario de Cabanellas, indica que es la capacidad para conocer una autoridad sobre una materia o asunto, es decir, mientras la admisibilidad se enfoca en el análisis de la aplicación presentada por una de las partes, la competencia se dedica a analizar sobre la jurisdicción que ésta posee para conocer el caso.

La Corte antes de emitir su pronunciamiento frente a ésta excepción preliminar, invitará a las partes, de creerlo necesario, a debatir los puntos controvertidos ya sea de hecho o de derecho y producir todo medio de prueba que se encuentre relacionado, según el artículo 79 numeral 8. En cuanto la Corte considere que posee los elementos necesarios para emitir su decisión en donde aceptará o negará la excepción alegada por una de las partes dictará un fallo preliminar, es decir, este fallo corresponderá a la forma de la solicitud de aplicación mas no es un fallo sobre el fondo del caso. Si la Corte determina que si es competente para analizar el caso y la aplicación es admisible se procederá a conocer el fondo de la controversia, a través de la fijación de los plazos para la continuación del procedimiento de fondo.³¹

vii. Procedimiento

²⁸ *Ibíd.*, artículo 79 numeral 1, anteriormente, la primera parte de éste párrafo decía lo siguiente: dentro del plazo fijado para el depósito de la contramemoria, sin embargo fue enmendada el 1 de febrero de 2001.

²⁹ *Ibíd.* Artículo 79 numeral 2.

³⁰ *Ibíd.* Artículo 79 numeral 3.

³¹ *Ibíd.* Artículo 79 numeral 9.

Los idiomas oficiales de la Corte Internacional de Justicia son el inglés y el francés, sin embargo, si las partes lo solicitan la Corte podrá autorizar el uso de cualquier idioma que no sean estos dos oficiales³²; el artículo 51 del Reglamento indica que acompañado a cada original de cada alegato escrito se entregará una traducción en francés o en inglés en donde se certifique que es exacta a la versión en el idioma no oficial.

1. Acciones

De considerar necesario la Corte tiene la facultad de indicar medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes, esto según el Estatuto de la Corte, artículo 41 párrafo 1.

Las partes estarán representadas por agentes³³, mismos que son obligatorios y necesarios desde el principio del proceso puesto que son el medio por el cual el Tribunal se comunica con las partes y estos se encuentran representados ante el propio Tribunal; según el artículo 52 del Reglamento de la Corte, es recomendable que los agentes de las partes se informen en la Secretaría de la Corte acerca del formato de presentación de los alegatos escritos. Así mismo, el artículo 60 del mencionado Reglamento indica que el agente es el encargado de dar lectura de las conclusiones finales; por otro lado, las partes también podrán tener consejeros o abogados; estos gozarán de privilegios e inmunidades necesarios para el libre desempeño de sus funciones.³⁴

2. Fases

Existen dos fases en el procedimiento de la Corte: la fase escrita y la fase oral³⁵. La fase escrita se comprende de una memoria realizada por el demandante o también llamada demanda y una contra memoria presentada por el demandado³⁶, también existirán

³² Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 39 párrafos 1 y 3.

³³ *Ibíd.* artículo 42 párrafo 1.

³⁴ *Ibíd.* artículo 42 párrafos 2 y 3.

³⁵ *Ibíd.* Artículo 43, numeral 1.

³⁶ Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, artículo 45 numeral 1.

réplicas y dúplicas si las partes tienen argumentos que contrademandar o aclarar, así como todo documento que sea parte del proceso para apoyo del objeto del conflicto³⁷.

Entre los recursos que tienen las partes dentro del proceso tenemos la demanda reconvenicional que puede ser admitida por la Corte siempre y cuando se encuentre dentro del ámbito de su competencia y debe tener una conexión directa con el objeto de la demanda de la contraparte; ésta demanda se la presentará en la contra memoria, específicamente, deberá estar contenida en las conclusiones, para lo cual la otra parte tiene el derecho a realizar sus opiniones en un alegato adicional, es así que, para todo esto y luego de haber escuchado a las partes, la Corte adoptará una decisión.³⁸

Por otro lado, en la fase oral, según el artículo 43 numeral 5 del Estatuto de la Corte, consiste en una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia en pleno donde participarán los testigos, peritos, agentes, consejeros y abogados de las partes, exponiendo sus argumentos, desarrollando sus pruebas y demostrando sus teorías.

El artículo 57 del Reglamento de la Corte se refiere específicamente a la producción de documentos y medios de prueba que deben ser comunicados con la debida antelación, antes de la apertura del procedimiento oral, en donde se manifieste la intención de pedir a la Corte la participación de las personas relacionadas al caso; en la lista deben estar bien determinadas las personas que van a participar, con sus nombres completos, apellidos, nacionalidades, calidades y domicilios, especialmente de los testigos y peritos; además de una breve explicación sobre el tema que cada una de estas personas aportará en el caso en litigio.

Las conclusiones que presenten las partes en el proceso al momento de terminar las fases escritas y orales son muy importantes al momento de dictar el fallo, puesto que simplifican el trabajo de los jueces; es importante mencionar que la decisión de la Corte es obligatoria únicamente para las partes en litigio y respecto del caso que se ha decidido (Estatuto de la Corte artículo 59), por tanto no genera responsabilidades ni obligaciones a los demás Estados miembros; y, en cuanto a la aplicación de los Estados parte de la

³⁷ Óp. Cit. artículo 43 numeral 2.

³⁸ Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, artículo 80.

controversia, la decisión se limita al caso en particular, si existiese o se generase un nuevo conflicto se deberá iniciar un nuevo proceso.

viii. Fallo

Para que la Corte pueda tratar los casos en pleno bastará un quórum de nueve magistrados³⁹; según el Estatuto de la Corte en su artículo 53 numeral 2, indica que la Corte antes de emitir su decisión, deberá asegurarse no sólo de su competencia conforme los artículos 36 y 37, sino que también debe revisar que la demanda se encuentre bien fundamentada de acuerdo a los hechos y al derecho. Además todas las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de votos de los magistrados presentes (Estatuto de la Corte, artículo 55 numeral 1); las deliberaciones, tal como lo menciona el Estatuto en su artículo 54 numeral 3 se celebrarán en privado y permanecerán secretas, sin embargo, si uno o varios de los magistrados no sienten que el fallo expresa su opinión parcial o totalmente, éstos tienen derecho a añadir al fallo su opinión disidente⁴⁰.

El fallo será leído, previa la notificación de las partes, en audiencia pública de la Corte y tendrá fuerza de obligatoria para las partes desde el día de su lectura; será definitivo e inapelable, sin embargo, de existir desacuerdos sobre el sentido o el alcance del mismo, la Corte tiene la potestad de interpretar la solicitud de las partes, cualquiera que ésta sea⁴¹.

Por otro lado, las partes podrán, antes de que se emita el fallo definitivo, notificar por escrito de forma conjunta o separada su desistimiento del procedimiento; la Corte, en consecuencia, emitirá una providencia en donde se ordene la cancelación del proceso, en el caso de ser realizada de forma conjunta; si el desistimiento se da por arreglo amistoso se podrá hacer constar de este hecho en la providencia con los términos del arreglo o en un anexo a la misma. Para los casos en donde la Corte no se encuentra reunida, es el Presidente de la antes mencionada, el que se encuentra facultado para dictar cualquier

³⁹ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 25 párrafo 3.

⁴⁰ Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, artículo 95 párrafo 2 en concordancia con el Estatuto en su artículo 57.

⁴¹ Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, artículo 94 y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 60.

providencia tomada de conformidad en el artículo 88 del Reglamento de la Corte en mención.

ix. Recursos

En caso de desacuerdo la Corte analizará las solicitudes presentadas por las partes; se revisará el fallo cuando una solicitud se funda en el descubrimiento de un hecho que pueda ser decisivo para la pronunciación del fallo, ya que éste debe ser nuevo, es decir, que la Corte no haya tenido conocimiento del hecho anteriormente, y en donde se demuestre que no existió negligencia por parte de los Estados en litigio.⁴²

La solicitud o demanda de revisión podrá ser presentada dentro del término de seis meses después del descubrimiento del nuevo hecho, y no podrá ser solicitada luego que hayan transcurrido 10 años a partir de la fecha de la emisión del fallo⁴³, es necesario acompañar a esta solicitud los documentos de soporte. También, en el caso de existir desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, las partes pueden presentar una demanda de interpretación a través de una solicitud o notificación de un compromiso entre las partes para éste propósito, en donde se determinará con precisión el o los puntos de desacuerdos en cuanto al contenido o el alcance del fallo emitido por la Corte⁴⁴.

En relación a la solicitud presentada por una de las partes, tiene derecho la otra parte a exponer sus razones u observaciones por escrito dentro de un plazo determinado por la Corte, mientras que, cuando la demanda de interpretación ha sido presentada mediante notificación de un compromiso, la Corte podrá dar a las partes la oportunidad de presentar un escrito con más información relacionada a su notificación de compromiso, de creerlo procedente.⁴⁵

⁴² Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 61 numeral 1.

⁴³ *Ibíd.* Artículo 61 párrafos 4 y 5.

⁴⁴ Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, artículo 98 párrafos 1 y 2.

⁴⁵ *Ibíd.* Artículo 98 párrafos 3 y 4.

c. Opiniones Consultivas

Con respecto a las opiniones consultivas, la Corte podrá emitir su criterio sobre cualquier cuestión jurídica, previa la solicitud de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, otros órganos de las Naciones Unidas y organismos especializados⁴⁶; estos últimos deben contar con una autorización previa de la Asamblea General, siempre y cuando estén dentro de la esfera de sus competencias⁴⁷; es decir, no pueden pedir dictámenes a la Corte las personas naturales o jurídicas ni los Estados pero si pueden hacerlo las organizaciones internacionales afines a los temas que competen a la Corte.

El Secretario es el responsable de notificar a todos los Estados y organizaciones internacionales que tengan derecho para comparecer ante la Corte tan pronto se reciba la solicitud por escrito de la opinión consultiva (Estatuto de la Corte, artículo 66 párrafo 1).

La Corte hará conocer sobre el resultado de sus opiniones consultivas en audiencia pública; mientras que el Secretario General de las Naciones Unidas, los representantes de los Miembros de las Naciones Unidas, los demás Estados y las organizaciones internacionales directamente interesadas deberán ser previamente notificados (artículo 67 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia).

Según la Corte, el dictamen de las opiniones consultivas no produce efectos de cosa juzgada puesto que no son decisiones normativas ni tienen fuerza obligatoria, solamente tienen carácter de consulta, como su nombre lo indica, sin embargo, producirá efectos obligatorios dependiendo de otros instrumentos internacionales, que no sean el Estatuto o el Reglamento de la Corte, en donde se acuerde concederle tal efecto.

Según el autor Antonio Remiro Brotons⁴⁸, las sentencias y opiniones consultivas son aportaciones de gran relevancia en la formación de la jurisprudencia internacional, debido

⁴⁶ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 65 párrafo 1.

⁴⁷ Carta de las Naciones Unidas, artículo 96.

⁴⁸ Antonio Remiro Brotons y otros, Derecho Internacional, Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1997, pág. 865.

que a pesar de ser obligatorias únicamente para las partes en litigio (inter partes) y sobre el caso en discusión, sus fallos han hecho que la universalidad y generalidad de la Corte Internacional de Justicia haya obtenido un reconocimiento especial por sobre los demás tribunales internacionales.

2. ANTECEDENTES DEL CONFLICTO HONDURAS - NICARAGUA

a. Revolución Sandinista

Para realizar el estudio de este caso es necesario analizar el origen de los conflictos que Nicaragua ha librado, tanto internamente como con sus países vecinos, en este caso, con Honduras; tal es así que, debemos iniciar recordando la “Revolución Sandinista” que se inició con la guerrilla revolucionaria comandada por Augusto César Sandino, de ahí su nombre, quienes lucharon contra las tropas estadounidenses de ocupación en una época anterior al nacimiento de Daniel Ortega Saavedra, quien posteriormente sería uno de los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional; ésta oposición se creó en rechazo a la dictadura familiar instaurada por el general Anastasio Somoza García, quien fungía como Comandante en Jefe de la Guardia Nacional, y que posteriormente fue heredada por sus hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle.⁴⁹

i. Frente Sandinista de Liberación Nacional

El clandestino FSLN se dio a conocer en Nicaragua y a nivel internacional con el canje de los prisioneros sandinistas por los rehenes, colaboradores directos de Somoza, (entre los prisioneros se encontraba Daniel Ortega quien permaneció preso 7 años siendo víctima de hambre, torturas, vejaciones de todo tipo y largos periodos de comunicación, etc.) el 27 de diciembre de 1974, rehenes que fueron tomados por el comando Juan José Quezada del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional)⁵⁰.

⁴⁹ Roberto Ortiz de Zárate, Biografías de Líderes Políticos – José Daniel Ortega Saavedra. Internet: www.cidob.org. Acceso: 1 de noviembre de 2010.

⁵⁰ El “Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), organización político – militar fundada en Honduras en julio de 1961 por, entre otros Tomás Borge Martínez, Silvio Mayorga Delgado y Carlos Fonseca Armador. El FSLN, de una manera explícita que sus directos predecesores, la JPN y el Movimiento Nueva Nicaragua (MNN) de Fonseca, recuperaba la bandera revolucionaria del líder asesinado en 1934 y apostaba por la subversión abierta” Roberto Ortiz de Zárate, Biografías de Líderes Políticos – José Daniel Ortega Saavedra. Internet: www.cidob.org. Acceso: 1 de noviembre de 2010.

Ortega y los demás comandantes revolucionarios acordaron en Costa Rica el 18 de junio de 1979 constituir una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, conformado por Sergio Ramírez, Moisés Hassan, Alfonso Robelo Callejas, Violeta Barrios de Chamorro⁵¹ y Daniel Ortega, éste último hacía las veces de coordinador de la misma y Presidente, que reemplazó el gobierno dictatorial de la familia Somoza el 19 de julio de 1979, con el objetivo de instaurar un modelo de economía mixta para corregir las imperantes desigualdades sociales y aplicar la no alineación en política exterior⁵², en ese momento histórico estaba al poder Anastasio Somoza, quien se caracterizó por ser una persona corrupta, dictatorial y asesina, según afirmaciones de la época. Al huir de Nicaragua, Somoza, la Guardia Nacional quedó desarticulada y fue reemplazada por el Ejército Popular Sandinista de manera oficial el 22 de agosto del mismo año.

En el poder, el FSLN trabajó en la reconstrucción del país, ya que luego de la dictadura, los abusos y explotaciones de la familia Somoza y la Guardia Nacional, se encontraba con un balance total que era conmovedor; es por eso que, las primeras medidas decretadas por la Junta fueron: la confiscación de las propiedades de la familia Somoza, la nacionalización de la banca, el control del comercio exterior, seguros, minería, salud, educación y reforma agraria; necesidades urgentes e imperantes de los ciudadanos nicaragüenses; sin embargo, las medidas adoptadas por la Revolución Sandinista tenían restricciones muy drásticas sobre la utilización de bienes, lo que provocó el disgusto y la oposición de los empresarios nicaragüenses que más tarde provocarían la desestabilización del FSLN.

Es importante recalcar que en Centro y Latinoamérica se encontraban desarrollando procesos revolucionarios en donde se requirió de verdaderas transformaciones sociales a fin de sostener y proteger los procesos revolucionarios; y, Nicaragua no fue la excepción, tal es así que buscó apoyo estratégico de los sectores más afines a la Revolución Sandinista, como la Unión Soviética y Cuba, principalmente.

⁵¹ Alfonso Robelo Callejas y Violeta Chamorro abandonaron la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional al cabo de un año de constituida. Roberto Ortiz de Zárate, Biografías de Líderes Políticos – José Daniel Ortega Saavedra. Internet: www.cidob.org. Acceso: 1 de noviembre de 2010.

⁵² *Ibíd.*

Desde que los sandinistas tomaron el poder, tuvieron que hacer frente a pequeños grupos de antiguos miembros de la Guardia Nacional que se encontraban ubicados en el límite fronterizo con Honduras; estos últimos, recibieron la ayuda de oficiales argentinos y el apoyo encubierto de Estados Unidos, que con el cambio de Gobierno de Jimmy Carter a Ronald Reagan se inició un proceso de aislamiento a través de la suspensión financiera en contra de Nicaragua; además se conoce que *“la CIA empezó a instruir y a suministrar armas a ex guardias somocistas con el objeto de convertirlos, desde bases apostadas en territorio hondureño muy cerca de la frontera, en una fuerza combativa de oposición antisandinista”*⁵³. Este apoyo consistía en contribuciones económicas, formación militar, implementación de equipo e infraestructura acorde a sus necesidades, entre otras cosas.

ii. La Contra

Con el fin de representar la fuerza que tenía la *Contra*, ubicada en territorio hondureño, según datos no oficiales, llegó a tener alrededor de 15.000 hombres.

A este movimiento *contrarevolucionario* se adhirieron otros grupos conformados por empresarios descontentos, hacendados, conservadores del norte del país hasta sandinistas desengañados⁵⁴, tomando el nombre de Fuerza Democrática Nicaraguense (FDN), pero más conocidos como *contras*, *contrarrevolucionarios*, o simplemente como la *contra*, los que se encargaron de realizar incursiones militares a fin de crear hostigamiento a destacamentos del EPS (Ejército Popular Sandinista) y para realizar sabotaje económico, como lo menciona el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona en su sección biografías de líderes políticos – Daniel Ortega Saavedra⁵⁵.

⁵³ Ibíd.

⁵⁴ *“Los problemas comienzan con el resentimiento de los sectores desplazados del poder político, económico y social del régimen anterior: la guardia nacional afincada en Honduras, la burocracia política somocista exiliada en Estados Unidos, los terratenientes y grandes comerciantes posando en Centroamérica, la jerarquía eclesiástica que censuraba la alianza entre el sandinismo y el cristianismo revolucionario; sectores que ante la incapacidad interna de poder frenar las transformaciones sociales llevadas a cabo por el sandinismo con el masivo y entusiasta apoyo de la población, piden apoyo al gobierno norteamericano.”* Orlando Núñez Solo, Gloria Cardenal, *La Guerra en Nicaragua*, Nicaragua, Ed. El Amanecer S.A., 1991, pág.26.

⁵⁵ Roberto Ortiz de Zárate, *Biografías de Líderes Políticos – José Daniel Ortega Saavedra*. Internet: www.cidob.org. Acceso: 1 de noviembre de 2010.

Según la versión nicaragüense la *contrarrevolución* fue creada con el apoyo y patrocinio de los Estados Unidos de América; especialmente entre los años 1984 al 1989, años en los que recibieron bastante apoyo económico de Estados Unidos en territorio hondureño; incluso años anteriores, como es el caso del año 1981, el gobierno de Ronald Reagan impuso el bloqueo económico a Nicaragua, mientras que financiaba a grupos armados antisandinistas conocidos como la *Contra* o *Contrarrevolucionarios* con alrededor de 300 millones de dólares en ayuda y equipamiento, lo que facilitó para que la *Contra* realice actos violentos contra la ciudadanía nicaragüense, y ponga en peligro la soberanía de ese país.

El 19 de abril de 1981, una patrulla nicaragüense capturó a dos miembros de las fuerzas armadas hondureñas en su territorio, éstos confesaron que el propósito de la misión era recopilar información para ser usada por los grupos armados de la *Contra*, lo que provocó fuertes protestas por parte del gobierno de Nicaragua a las autoridades hondureñas, sin embargo, estas protestas no fueron escuchadas por el gobierno hondureño.

Ante la insistencia de Nicaragua, los presidentes de Honduras y Nicaragua se reunieron en el puesto fronterizo de El Guasaule el 13 de mayo de 1981, en donde Honduras se comprometió a ayudar a detener las incursiones armadas de la *Contra* y del ejército hondureño en territorio nicaragüense; a pesar de haber sido un compromiso aceptado por el gobierno de Honduras, se hizo caso omiso de lo acordado por parte de éste último.

iii. Ataques de la Contra y sus consecuencias

En los años 1981 y 1982 los ataques armados en territorio nicaragüense, frontera con Honduras, se incrementaron de tal manera que mucha de la población que vivía en el área tuvo que ser evacuada de emergencia. Ésta situación obligó a Nicaragua a pedir una reunión urgente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en abril de 1982, en donde Estados Unidos, miembro del Consejo de Seguridad, vetó la resolución alegando cuestiones de principio, lo que impidió a Nicaragua continuar con el proceso ante éste órgano, permitiendo que los ataques desde Honduras continúen incrementándose.

Aparte de la ayuda y la tolerancia del gobierno de Honduras al dejar que los grupos armados de la *Contra* residan en su territorio, también el ejército hondureño participó activamente en los ataques realizados en territorio nicaragüense, tal es así que el 4 de abril de 1982 tres escuadrones del ejército hondureño llegaron a la estación fronteriza de El Guasaule y penetraron territorio nicaragüense hasta el área de La Ceiba, ahí procedieron a secuestrar a 21 campesinos del sector que, posteriormente, fueron llevados a la ciudad hondureña de Choluteca.

Otros ataques ocurrieron el 5 de junio de 1983, en el sector de El Porvenir ingresaron alrededor de 600 *Contras* con protección de fuego del ejército hondureño en donde 20 ciudadanos nicaragüenses perdieron sus vidas. Así como el 3 de febrero de 1984, cuatro aeronaves provenientes de territorio hondureño atacaron a una unidad militar en Nicaragua en el sector del Manzanillo, Departamento de Chinandega; además, el 18 de abril de 1985, tres aviones de combate de las fuerzas aéreas hondureñas atacaron y hundieron un bote guardacostas nicaragüense en sus propias aguas; mientras que, el 14 de marzo de 1986, tres destacamentos de la *Contra* de aproximadamente 60 personas cada uno, incursionaron en territorio nicaragüense en el sector de La Fraternidad, localizado en la autopista Panamericana y atacaron la oficina de aduanas.

Cabe destacar que desde el año 1981 Honduras ha construido infraestructura militar tales como aeropuertos, bases navales, edificaciones, etc. en el borde fronterizo con Nicaragua, lo que confirma los argumentos realizados por el gobierno nicaragüense sobre la participación activa y encubridora del gobierno hondureño.

Como resultado de éstos atropellos, Nicaragua se vio forzada a redireccionar los fondos destinados para el desarrollo y fortalecimiento de la ciudadanía nicaragüense hacia infraestructura, equipamiento y material para la protección de la zona limítrofe con Honduras, entre estos recursos se encontraban la movilización del personal militar, ocasionando el debilitamiento de la frágil economía nicaragüense; es así que, el 15 de marzo de 1982 la Junta proclamó el estado de sitio suspendiendo algunas garantías constitucionales⁵⁶, causando pérdidas en la agricultura, el comercio, en la infraestructura del país y el debilitamiento de las fuerzas revolucionarias nicaragüenses en el poder.

⁵⁶ *Ibíd.*

Además, la Revolución Sandinista y el conflicto con la *Contra* afectó a los agroindustriales de la oligarquía nicaragüense, poniendo presión sobre el proceso de mercantilización y la acumulación privada de la economía campesina, mientras se llevaba a cabo el proceso de transformaciones sociales a favor del pueblo nicaragüense, lo que provocó una gran enemistad con la administración norteamericana, el bloque oligárquico-burgués, un gran sector del campesinado medio y las comunidades indígenas⁵⁷.

Es así que, Nicaragua en 1983 se vio obligada a instituir el servicio militar obligatorio lo que debilitó la fuerza familiar campesina y agraria; y, bajo el estado de excepción en el que se encontraban, se suspendieron algunas libertades civiles, se encarceló a varios opositores políticos y se restringió la libertad de prensa, recortando considerablemente los presupuestos destinados a programas sociales y económicos; y, a su vez, provocando varias violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense por parte de su gobierno.

Existen datos de prensa, publicaciones y versiones de ciudadanos nicaragüenses en donde afirman que muchos civiles, ciudadanos nicaragüenses, tuvieron que abandonar sus hogares e incluso su país a causa de la violencia imperante en el territorio; tal es así que, el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona en su sección biografías de líderes políticos – Daniel Ortega Saavedra, indica que hubieron alrededor de unos 50.000 muertos, 120.000 refugiados o exiliados en el extranjero y 600.000 personas sin hogar⁵⁸, datos preocupantes en el momento histórico que se encontraba viviendo Nicaragua; a pesar de todos estos hechos, el Frente Sandinista no reconoció que en el país se desarrollaba una guerra civil⁵⁹ y las fuerzas *contrarrevolucionarias* tampoco reconocieron que existía una guerra cargada de agresión norteamericana.

⁵⁷ Orlando Núñez Solo, Gloria Cardenal, La Guerra en Nicaragua, Nicaragua, Ed. El Amanecer S.A., 1991, págs. 22 y 23.

⁵⁸ Roberto Ortiz de Zárate, Biografías de Líderes Políticos – José Daniel Ortega Saavedra. Internet: www.cidob.org. Acceso: 1 de noviembre de 2010.

⁵⁹ *“Esta conflagración militar de carácter contrarrevolucionario fue posible por la convergencia de una guerra de agresión encubierta o no declarada, y la existencia de una guerra civil limitada al interior del país. En ella se enfrentan cuatro sectores: las fuerzas progresistas y revolucionarias del sandinismo; adversadas y cuestionadas por tres fuerzas que llegan a converger, a saber: el gobierno norteamericano y sus aliados regionales; el bloque oligárquico-burgués de la derecha nicaragüense; y un sector significativo del campesinado y de las comunidades indígenas nicaragüenses. ... tanto la agresión norteamericana, el bloque oligárquico-burgués, y el*

iv. Declaraciones desde Honduras

Por otro lado, se realizaron declaraciones públicas por parte de autoridades hondureñas de alto nivel en donde se confirmó que la *Contra* operaba con el conocimiento y la ayuda del gobierno de Honduras; por ejemplo: el presidente de Honduras, José Azcona Hoyos, en una rueda de prensa en abril de 1986 dijo: “... *el gobierno de Honduras podría retirar los contras del territorio hondureño*” y ellos tienen “*la capacidad de hacerlo inmediatamente*”⁶⁰; así como, el Presidente del Congreso de Honduras ha hecho público el apoyo de la *Contra* en territorio hondureño a fin de respaldar la lucha contra los leninistas-marxistas de Nicaragua, además el ex rector de la Universidad Nacional de Honduras, Dr. Arturo Jorge Reina dijo: “... *en Honduras “hay tres ejércitos: el de Honduras, el ejército de Estados Unidos, y el ejército de las contras nicaragüenses*”⁶¹”.

v. Negociaciones de Paz y derrotas electorales

El conflicto nicaragüense llegó a su fin tras un largo proceso de negociación que se inició en 1983 por el Grupo de Contadora constituido por México, Venezuela, Colombia y Panamá; y, en 1985 continuó el proceso con el Grupo de Apoyo conformado por Argentina, Brasil, Perú y Uruguay; proceso que concluyó con la firma de Esquipulas (1986 y 1987) realizado en un encuentro de Presidentes Centroamericanos liderado por Óscar Arias y auspiciado por Vinicio Cerezo, en donde se solucionó el conflicto entre Nicaragua y El Salvador en el mes de agosto gracias al apoyo de los países latinoamericanos quienes se oponían a los intentos de Estados Unidos de América para desestabilizar la nación. A través de éste Plan de Paz se celebraron las negociaciones entre el FSLN y la *Contra* en 1988, cesando las hostilidades por parte de ésta última.

levantamiento campesino-indígena, nacen independientemente el uno del otro; con sus propios intereses y objetivos, aunque logrando articularse hasta conformar una sola fuerza denominada contrarrevolución” Orlando Núñez Solo, Gloria Cardenal, La Guerra en Nicaragua, Nicaragua, Ed. El Amanecer S.A., 1991, pág.18.

⁶⁰ Corte Internacional de Justicia, Case concerning border and transborder armed actions (Nicaragua v. Honduras) – application instituting proceedings submitted by the Government of Nicaragua, Volume I, Application; Memorial; Counter-Memorial, N° de vente: sales number 690, pág. 20.

⁶¹ *Ibíd.*

Esta confrontación política causó la división del país y de sus ciudadanos, tal es así que, el 25 de febrero de 1990, el partido político UNO ganó las elecciones⁶² con el 54.7% (Chamorro) frente al 40.8% (Ortega) del FSLN⁶³.

Por otro lado, en las elecciones del 20 de octubre de 1996 Daniel Ortega fue derrotado nuevamente, ésta vez, frente al conservador Arnoldo Alemán Lacayo, líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y de la Alianza Liberal (AL), con 51% frente a 37.7% de Ortega, quien asumió el poder como Presidente de la República de Nicaragua el 10 de enero de 1997⁶⁴. Es así como el FSLN no pudo retener el poder debido que ni el ejército ni el voto popular, estaban a su favor, dejando claro que el poder popular fue olvidado mientras se peleaba en la guerra con la *Contra*. Otro ejemplo claro es cuando Ortega es derrotado nuevamente en las elecciones del 4 de noviembre del 2001 contra Enrique Bolaños Geyer, con 42.3% de votos por parte de Ortega. Sin embargo, el 7 de noviembre de 2004 Ortega gana las elecciones con el 43.8% de los votos en todo el país.

Se puede decir que el fin de la guerra no se dio con la derrota electoral del FSLN sino cuando las fuerzas armadas campesinas, es decir, la *contrarrevolución*, fue desarmada por sus propios dirigentes con la colaboración de la OEA y de la ONU.

Como reflexión se puede decir que la influencia norteamericana jamás hubiese logrado el nivel de liderazgo que obtuvo entre las fuerzas internas nicaragüenses sino hubieran habido circunstancias generadas por la propia Revolución Sandinista que afectaron significativamente los intereses del bloque oligárquico-burgués y los intereses de gran parte del campesinado de las comunidades y pueblos indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua, que causó conmoción interna, tal es así que, como dice en el libro “La Guerra en Nicaragua” se llega a la siguiente conclusión:

⁶² “... el resultado electoral en donde el FSLN pierde el gobierno, es una muestra de la división político – social que alcanzó la sociedad nicaragüense, de la misma manera que el desenlace de la guerra y el desarme de los campesinos de la *Contra* por parte de la burguesía y de los interventores extranjeros, mostraron el destino reservado a los sectores populares con el cambio de gobierno.” Orlando Núñez Solo, Gloria Cardenal, La Guerra en Nicaragua, Nicaragua, Ed. El Amanecer S.A., 1991, pág.22.

⁶³ Roberto Ortiz de Zárate, Biografías de Líderes Políticos – José Daniel Ortega Saavedra. Internet: www.cidob.org. Acceso: 1 de noviembre de 2010.

⁶⁴ *Ibíd.*

“...Lo que muestra que en una sociedad dividida en clases como la que heredó la revolución sandinista es imposible favorecer a unos sin afectar a otros, como lo pregonan algunos teóricos de la armonía universal...”⁶⁵

vi. Obligaciones Internacionales

En vista de las violaciones a las obligaciones internacionales reconocidas por la Comunidad Internacional, Nicaragua presentó la aplicación ante la Corte Internacional de Justicia el 28 de julio de 1986 con el siguiente título: *Conflictos Armados Fronterizos y Transfronterizos entre Nicaragua y Honduras*.

b. Antecedentes jurídicos de los conflictos presentados por Nicaragua ante la CIJ.

Una vez detallados los antecedentes fácticos de la Revolución Sandinista procedo a detallar los antecedentes jurídicos relacionados a los conflictos planteados por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.

i. Caso: actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua

El 9 de abril de 1984, Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia una solicitud en contra de Estados Unidos de América en el caso relativo a las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, el 26 de noviembre de 1984, la Corte declaró la competencia y admisibilidad de ésta solicitud, con 15 votos a favor y 1 en contra y por unanimidad, respectivamente, basándose en la “interpretación o aplicación del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos de América y la República de Nicaragua, firmado en Managua el 21 de enero de 1956”⁶⁶ y que entró en vigencia el 24 de mayo de 1958, sobre la base del artículo XXIV en su párrafo 2, que dice:

⁶⁵ Orlando Núñez Solo, Gloria Cardenal, La Guerra en Nicaragua, Nicaragua, Ed. El Amanecer S.A., 1991, pág. 25.

⁶⁶ Naciones Unidas, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Nueva York, Publicación de las Naciones Unidas, Número de venta: S.92.V.5, 1992, Pág. 188 Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010.

*Toda controversia entre las partes respecto a la interpretación o aplicación del presente tratado, que no se arregle satisfactoriamente por la vía diplomática, se someterá a la Corte Internacional de Justicia a menos que las partes convengan en arreglarla por algún otro medio pacífico.*⁶⁷

Posteriormente, el 27 de junio de 1986 la Corte emitió el fallo a favor de Nicaragua sobre el fondo de la controversia, basados, entre otras cosas, en el perjuicio ocasionado a la República de Nicaragua, por infringir la obligaciones que les incumbe en relación al derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado, así como, en la violación de obligaciones internacionales sobre no usar la fuerza contra otro Estado y no interrumpir el comercio marítimo pacífico; concluye indicando la decisión de la Corte sobre la obligación que tiene Estados Unidos de América para indemnizar a la República de Nicaragua de todos los perjuicios causados por las infracciones a las obligaciones del Derecho Internacional, así por los perjuicios causados en Nicaragua por las infracciones del Tratado de Amistad, Comercio, Navegación entre las partes.⁶⁸

Sin embargo, ante la negativa y el desentendimiento de los Estados Unidos de América para cumplir con la obligación que la Corte le impuso por los perjuicios causados en el caso *actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua*, en carta de 12 de septiembre de 1991 el agente de Nicaragua informó a la Corte que su Gobierno había decidido renunciar a continuar con el procedimiento, solicitando el respectivo desistimiento y la cancelación del asunto, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento de la Corte⁶⁹; tal es así que, el 25 de septiembre de 1991, plazo fijado por la Corte para que Estados Unidos de América se pronuncie sobre el desistimiento solicitado por Nicaragua, se recibió una carta del Asesor Jurídico del Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde aceptaban el mencionado desistimiento; es por esto que, el

⁶⁷ Ibíd. Pág. 191

⁶⁸ Óp. Cit. Pág. 211

⁶⁹ Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 89.- 1) Si, en el curso de un procedimiento incoado mediante una solicitud, el demandante informara por escrito a la Corte que renuncia a continuar el procedimiento y si, en la fecha de la recepción en la Secretaría de la Corte de este desistimiento, la Corte dictará una providencia tomando nota del desistimiento y ordenando la cancelación del asunto de que se trate del Registro General. El Secretario enviará copia de dicha providencia al demandado. 2) Si, en la fecha de la recepción del desistimiento, el demandado hubiera ya efectuado algún acto de procedimiento, la Corte fijará un plazo dentro del cual el demandado podrá declarar si se opone al desistimiento. Si en el plazo fijado no hubiera objetado al desistimiento, éste se considerará aceptado y la Corte dictará una providencia tomando nota del desistimiento y ordenando la cancelación del asunto del que se trate del Registro General. Si hubiese objetado se continuará el procedimiento. 3.-Si la Corte no estuviese reunida, las facultades que le confiere este Artículo podrán ser ejercidas por el Presidente.

26 de septiembre de 1991 el Presidente de la Corte dictó la providencia en donde se tomaba nota del desistimiento y se ordenaba la cancelación de éste asunto pendiente. (I.C.J. Reportes 1991, pág. 47)⁷⁰.

ii. Caso: Acciones armadas fronterizas y transfronterizas entre Nicaragua y Honduras

Por otro lado, la República de Nicaragua en su solicitud presentada el 28 de julio de 1986 ante la Secretaría de la Corte en contra de la República de Honduras se basa en los siguientes argumentos:

*... Acciones armadas fronterizas y transfronterizas organizadas por los contras en su territorio desde Honduras, a la asistencia prestada a los contras por las fuerzas armadas de Honduras, a la participación directa de éstas en ataques militares contra su territorio y a amenazas de uso de las fuerzas en su contra emanadas del Gobierno de Honduras*⁷¹.

Es por esto que, solicita a la Corte declare a su favor, lo siguiente:

- a) *Que las acciones y omisiones de Honduras en el período en cuestión constituyen infracciones de las diversas obligaciones de derecho internacional consuetudinario y de los tratados especificados en lo principal de esta solicitud respecto de los cuales corresponde responsabilidad legal a la República de Honduras;*
- b) *Que Honduras tiene la obligación de cesar y abstenerse inmediatamente de todo acto de ese tipo que pueda constituir infracción de las obligaciones jurídicas anteriormente mencionadas;*
- c) *Que Honduras tiene la obligación de indemnizar a la República de Nicaragua por todos los perjuicios causados a Nicaragua por las infracciones de las obligaciones de conformidad con las normas pertinentes del derecho internacional consuetudinario y de las disposiciones de tratados*⁷².

En este caso, Honduras impugnó la jurisdicción de la Corte, por lo que los primeros alegatos se basaron en la competencia y admisibilidad de la solicitud presentada por

⁷⁰ Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 1991 a 31 de julio de 1992, Documentos oficiales: Cuadragésimo Séptimo Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/47/4), Nueva York, 1992. Pág. 7 Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010

⁷¹ Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 1989 a 31 de julio de 1990, Documentos oficiales: Cuadragésimo Quinto Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/45/4), Nueva York, 1990. Pág. 5 Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010

⁷² *Ibíd.* Págs. 5 y 6.

Nicaragua, y se determinó mediante sentencia de 20 de diciembre de 1988 la competencia y admisibilidad para analizar el caso por parte de la Corte Internacional de Justicia.

Al respecto, cabe destacar que Nicaragua argumentó la competencia de Honduras basándose en la declaración de 20 de febrero de 1960, sin embargo, Honduras afirmó que esa declaración fue modificada por una declaración posterior realizada el 22 de mayo de 1986, que fue depositada ante el Secretario General de las Naciones Unidas antes de la solicitud presentada por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia el 28 de julio de 1986⁷³, en donde se excluían las controversias relacionadas a: *"cuestiones territoriales concernientes a la soberanía sobre las islas, los bancos y los cayos; las aguas interiores, los golfos y el mar territorial, su estatuto y sus límites"*, en un intento por impedir una demanda del gobierno nicaragüense por el involucramiento de Honduras en las agresiones en contra de Nicaragua. Sin embargo, esta modificación no fue suficiente ya que en 1950 Honduras había ratificado el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá sin ninguna reserva, aceptando ampliamente la jurisdicción de la Corte según el artículo XXXI del mencionado Pacto y las declaraciones formuladas por ambas partes según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte.⁷⁴

Es así que, el 21 de abril de 1989 el Presidente de la Corte fijó los plazos para el procedimiento escrito sobre el fondo de la controversia el 19 de septiembre de 1989 para la memoria de Nicaragua, misma que se prorrogó hasta el 8 de diciembre de 1989 a través de una providencia dictada el 31 de agosto de 1989 (I.C.J. Reportes 1989, pág. 123); además se fijó el 19 de febrero de 1990 para la entrega de la contra memoria por parte de Honduras.⁷⁵

El 11 de mayo de 1992, el Agente de Nicaragua mediante una carta, informó a la Corte sobre la decisión del Gobierno de Nicaragua para desistir del procedimiento iniciado ante

⁷³ Naciones Unidas, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Nueva York, Publicación de las Naciones Unidas, Número de venta: S.92.V.5, 1992, Pág. 247 y 248. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010.

⁷⁴ Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 1991 a 31 de julio de 1992, Documentos oficiales: Cuadragésimo Séptimo Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/47/4), Nueva York, 1992. Pág. 7 Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010

⁷⁵ Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 1989 a 31 de julio de 1990, Documentos oficiales: Cuadragésimo Quinto Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/45/4), Nueva York, 1990. Pág. 6 Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010

éste órgano jurisdiccional, por haber convenido a través de un acuerdo extrajudicial con la República de Honduras a fin de mejorar sus relaciones de buena vecindad. Es por esto que, según lo dispone el artículo 89 del Reglamento de la Corte, el Presidente fijó como fecha plazo el 25 de mayo de 1992 para que Honduras se pronuncie sobre el mencionado desistimiento, obteniendo la respuesta vía facsímil el 18 de mayo de 1992 y vía física el 27 de mayo de 1992, a través del coagente de Honduras, su pronunciamiento de no oponerse al desistimiento solicitado por su contra parte. Consecuentemente, el 27 de mayo de 1992 la Corte dictó la providencia respectiva sobre el desistimiento y la orden de cancelación del asunto en mención. (I.C.J. Reportes 1992, pág. 122)⁷⁶.

⁷⁶ Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 1991 a 31 de julio de 1992, Documentos oficiales: Cuadragésimo Séptimo Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/47/4), Nueva York, 1992. Pág. 8 Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010

3. FALLO DE 20 DE DICIEMBRE DE 1988, COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD

Según el Reporte Anual presentado por la Corte Internacional de Justicia a la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2010, 192 Estados son miembros de las Naciones Unidas y, por tanto, son partes del Estatuto de la Corte; de éste conjunto de Estados, sesenta y seis (66) han realizado declaraciones, muchos de ellos con reservas, reconociendo como obligatoria la jurisdicción de la Corte según lo contemplado en el artículo 36, párrafo 2 y 5 del Estatuto de la Corte⁷⁷.

Es importante recalcar que entre estos Estados se encuentra Honduras y Nicaragua, quienes presentaron sus declaraciones de aceptación por primera vez el 6 de junio de 1986 y el 24 de septiembre de 1929, respectivamente.

a. Competencia o Jurisdicción

Para iniciar el análisis de la excepción preliminar interpuesta por parte de Honduras en el caso *Conflictos Armados Fronterizos y Transfronterizos entre Nicaragua y Honduras*, relacionada a la jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Justicia, es necesario empezar precisando doctrinariamente los siguientes términos:

La competencia, según Guillermo Cabanellas es la atribución o capacidad para conocer una autoridad sobre una materia o asunto, también conocido como derecho para actuar;⁷⁸ mientras que, jurisdicción según el autor Caravantes “... es la potestad pública de conocer y fallar los asuntos conforme a la ley, es decir, es la facultad atribuida al poder judicial para administrar justicia”;⁷⁹ por otro lado, el autor Walter Guerrero, afirma que “mientras la jurisdicción es un poder abstracto, la competencia es ya una potestad

⁷⁷ Asamblea General, Reporte de la Corte Internacional de Justicia – 1 Agosto 2009-31 Julio 2010, Registros Oficiales: 65° Período de Sesiones Suplemento N° 4, Nueva York, 2010. Pág. 27 Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010

⁷⁸ Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Argentina, Editorial Heliasta, Decimosexta edición, 2003, pág. 78.

⁷⁹ Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo III; Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1967.

concreta”⁸⁰ y, en relación a la actividad que realiza la Corte, ésta tiene la potestad concreta cuando, ya sea con anterioridad o de forma *ipso facto*, se ha realizado una Declaración de Aceptación por parte de los Estados partes a fin de que la Corte pueda analizar el caso presentado.

Para esto, es importante mencionar la delimitación de la *jurisdicción*, como destaca Walter Guerrero, a fin de entender de mejor manera el ámbito de acción de la Corte Internacional de Justicia, ya que dice que existen

*...varias esferas de aplicación, entre las que se encuentra: a) La esfera territorial, que se aplica dentro del territorio de un Estado, sobre el cual éste ejerce plenamente su soberanía; b) La esfera intermedia, que se enmarca en el interés mutuo de los Estados en extender su poder de administrar justicia fuera del marco territorial, avanzando a zonas o sectores no sometidos a soberanía alguna, ...; y c) La esfera extraterritorial la cual es parte de los principios de reciprocidad internacional y la inmunidad diplomática,*⁸¹

Con esta explicación podemos determinar que el derecho internacional se maneja en la esfera intermedia y en la extraterritorial, puesto que, es en estas esferas en donde se requiere del contacto entre Estados soberanos, y, en este caso, es en donde los Estados deben ceder parte de su soberanía para permitir que un organismo independiente se encargue de dar solución a los conflictos y controversias que surgen como producto de estas interacciones.

Según el Reporte de la Corte Internacional de Justicia a la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2010, la Corte es el único organismo internacional de carácter universal con jurisdicción general, y que además tiene competencia doble, es decir, que puede decidir sobre controversias presentadas por los Estados, que se encuentran en el ejercicio de su soberanía, libremente; además puede responder a consultas en materia legal que han sido delegadas por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de acuerdo al ámbito de sus actividades, así como de otras agencias de las Naciones

⁸⁰ Diego Fernando Rodríguez Rodríguez, Tesis Jurisdicción y Competencia de la Corte Penal Internacional, Facultad de Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 2002.

⁸¹ Walter Guerrero V., La Jurisdicción y la Competencia Penal, 2da Edición, Tomo 1, Loja, 1988. Diego Fernando Rodríguez Rodríguez, Tesis Jurisdicción y Competencia de la Corte Penal Internacional, Facultad de Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 2002, págs. 50 y 51.

Unidas y de organismos que hayan sido autorizados previamente por la Asamblea General.⁸²

i. La competencia según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia

Entrando más en detalle, la competencia de la Corte se determina en su Estatuto en el artículo 36, en donde establece que la competencia se extiende para los litigios que las partes sometan y los demás asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o tratados y convenciones vigentes⁸³; es por esto que la Corte requiere, por parte de los Estados, de una cláusula jurisdiccional o también llamada declaración de aceptación, en donde los Estados firmantes se comprometen, de forma expresa, a aceptar la competencia de la Corte sobre posibles hechos que puedan suscitarse como producto de sus relaciones internacionales; en la actualidad, existen más de trescientos tratados bilaterales o multilaterales que contienen una cláusula de este tipo.

Otras formas de aceptación de la competencia de la Corte es a través de un acuerdo especial⁸⁴, o cuando los Estados partes reconocen como obligatoria *ipso facto* y sin convenio especial⁸⁵ la jurisprudencia de la Corte en controversias de orden jurídico que versen sobre la interpretación de un tratado en donde los Estados parte hayan declarado su consentimiento.

Las declaraciones de aceptación de los Estados en donde se acepta la competencia de la Corte para tratar controversias en el ámbito internacional, pueden o no tener tiempo de

⁸² Asamblea General, Reporte de la Corte Internacional de Justicia – 1 Agosto 2009-31 Julio 2010, Registro Oficial: 65° Período de Sesiones Suplemento N° 4, Nueva York, 2010. Pág. 3 y 4 Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010.

⁸³ Estatuto de la Corte artículo 36 numeral 1.

⁸⁴ Óp. Cit. Pág. 3 Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010.

⁸⁵ En el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 2 detalla claramente el reconocimiento *ipso facto* y sin convenio especial de la siguiente manera: *Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre: a. la interpretación de un tratado; b. cualquier cuestión de derecho internacional; c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional; d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.*

duración, es decir, existen aceptaciones indeterminadas y aceptaciones con período de duración determinado que deberán ser actualizadas y renovadas en un período establecido; ambos tipos de declaraciones para que sean perfeccionadas y aplicadas deberán ser remitidas al Secretario General de las Naciones Unidas quien deberá dar a conocer al resto de la comunidad internacional parte de éste Estatuto y al Secretario de la Corte;⁸⁶ es importante señalar que a estas declaraciones de aceptación se les denomina actos unilaterales dependientes, determinando de esta manera la participación de la Corte⁸⁷ en la solución del conflicto.

Por otro lado, en virtud del artículo 36 numeral 5 existen países que presentaron sus declaraciones de aceptación a la Corte Permanente de Justicia Internacional y que aún están vigentes, estas declaraciones son consideradas como aceptaciones a la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia para el período que aún les quede de vigencia y conforme con sus términos⁸⁸, tal es el caso de: Argentina, Australia, Belarus, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, **Honduras**, India, Irán, Iraq, Lebanon, Liberia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, **Nicaragua**, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Arabia Saudita, África del Sur, Siria, Turquía, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela⁸⁹, es por esto que se denomina a éstos países como *miembros originales*.

Para efectos de esta tesina, me permito enfatizar el contenido del numeral 6 del artículo 36 de la Corte Internacional de Justicia, en donde se expresa que la Corte, frente a una disputa, decidirá si tiene o no jurisdicción sobre una controversia sometida por los Estados partes con el fin de encontrar solución a sus conflictos.

⁸⁶ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 36 numeral 4

⁸⁷ Antonio Remiro Brotons y otros, Derecho Internacional, Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1997, Pág. 872

⁸⁸ Corte Internacional de Justicia, Caso relativo a acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras) – Competencia y de la Corte y Admisibilidad de la solicitud de 20 de diciembre de 1988, Informes de 1988, Pág. 69, Lista General N° 74, año 1988, Pág. 16.

⁸⁹ Corte Internacional de Justicia, Jurisdicción – Estados con derecho a comparecer ante la Corte. Internet: www.icj-cij.org Acceso: 2 de noviembre de 2010

ii. La competencia según el Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas

Los Estados Americanos miembros de la OEA participaron en la Novena Conferencia Internacional Americana en donde se trataron los mecanismos de derecho internacional que podían ser utilizados a fin de dar solución a las controversias surgidas entre Naciones; como resultado de éste encuentro se suscribió en Bogotá en 1948 el *Tratado Americano de Soluciones Pacíficas*, también llamado *Pacto de Bogotá*, en el cual firmaron 21 miembros originales de la Organización de los Estados Americanos, sin embargo, no todos lo ratificaron.⁹⁰

El *Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas* establece la competencia de la Corte basado en el artículo 36 párrafo 2 del Estatuto de la misma,⁹¹ así como también las controversias que hubieran fracasado con los métodos alternativos de solución de conflictos como la conciliación; y, las partes no hayan accedido a seguir el procedimiento arbitral⁹².

Es preocupante conocer que, a pesar de los propósitos que han tenido los Estados al redactar y aprobar el Pacto de Bogotá a fin de fortalecer el compromiso adquirido sobre el empleo del arreglo judicial para la solución conflictos entre Estados, 6 Estados Americanos originales no son partes del Pacto y ningún otro miembro no originario se ha adherido⁹³ hasta la actualidad.

En el caso en estudio, Nicaragua y Honduras firmaron el 30 de abril de 1948 el Pacto de Bogotá convirtiéndolos en *miembros originales*, y firmaron la ratificación el 21 de junio de 1950 y el 13 de enero de 1950, respectivamente; a pesar de los intentos de Honduras por negar este hecho, es importante destacar que Honduras no ha realizado ninguna reserva a éste Tratado; es por esto que la Corte declara su competencia para analizar el caso

⁹⁰ Íñigo Salvador Crespo, Tendencias en los litigios entre estados de Iberoamérica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en Anuario IHLADI, No. 19, 2010, pág. 10.

⁹¹ Pacto de Bogotá, artículo XXXI

⁹² *Ibíd.*, artículo XXXII

⁹³ Los Estados Americanos originales que no son parte del Pacto de Bogotá son: Argentina, Bolivia, Cuba, Guatemala, Estados Unidos y Venezuela. Íñigo Salvador Crespo, Tendencias en los litigios entre estados de Iberoamérica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en Anuario IHLADI, No. 19, 2010, págs. 10 y 11.

presentado por Nicaragua en base al artículo XXXI del mencionado Pacto y, expresa que los artículos XXXI y XXXII son dos caminos independientes e individuales para alcanzar el acceso a la Corte⁹⁴, afirmaciones que serán analizadas con detalle a continuación.

iii. Análisis del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia el 20 de diciembre de 1988 (Nicaragua vs. Honduras)

Basados en los conflictos surgidos entre Honduras y Nicaragua por la presencia de los *contrarrevolucionarios*, llamados también la *Contra*, desarrollado en capítulo anterior; La República de Nicaragua, a través de su embajador en los Países Bajos, presentó una solicitud el 28 de julio de 1986 ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia en contra de la República de Honduras por:

*... Acciones armadas fronterizas y transfronterizas organizadas por los contras en su territorio desde Honduras, a la asistencia prestada a los contras por las fuerzas armadas de Honduras, a la participación directa de éstas en ataques militares contra su territorio y a amenazas de uso de las fuerzas en su contra emanadas del Gobierno de Honduras*⁹⁵.

En la solicitud presentada por Nicaragua se solicita a la Corte que declare a su favor, lo siguiente:

- a) *Que las acciones y omisiones de Honduras en el período en cuestión constituyen infracciones de las diversas obligaciones de derecho internacional consuetudinario y de los tratados especificados en lo principal de esta solicitud respecto de los cuales corresponde responsabilidad legal a la República de Honduras;*
- b) *Que Honduras tiene la obligación de cesar y abstenerse inmediatamente de todo acto de ese tipo que pueda constituir infracción de las obligaciones jurídicas anteriormente mencionadas;*
- c) *Que Honduras tiene la obligación de indemnizar a la República de Nicaragua por todos los perjuicios causados a Nicaragua por las infracciones de las obligaciones*

⁹⁴ Íñigo Salvador Crespo, Tendencias en los litigios entre estados de Iberoamérica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en Anuario IHLADI, No. 19, 2010, pág. 12.

⁹⁵ Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 1989 a 31 de julio de 1990, Documentos oficiales: Cuadragésimo Quinto Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/45/4), Nueva York, 1990. Pág. 5 Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010.

*de conformidad con las normas pertinentes del derecho internacional consuetudinario y de las disposiciones de tratados*⁹⁶.

Honduras en contestación a la solicitud presentada por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia impugnó la jurisdicción de la misma, por tanto, los primeros alegatos de éste caso se centraron en analizar la competencia y admisibilidad de la Corte para analizar y, posteriormente, juzgar el caso presentado por Nicaragua; según el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, artículo 79 numeral 1, cuando el demandado presenta una excepción de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la solicitud, la Corte deberá pronunciarse sobre estas excepciones antes de continuar con el proceso sobre el fondo de la controversia, y será presentada de forma escrita en un plazo de tres meses a partir de la presentación de la memoria; de ésta manera la Corte podrá pronunciarse sobre cualquier asunto relacionado a la competencia y la admisibilidad, de forma conjunta o separada, pero siempre deberá ser en la fase preliminar del procedimiento, también la Corte podrá invitar a las partes a debatir sobre todo punto de hecho y de derecho, así como producir medios de prueba, de considerarlo necesario.⁹⁷

Al respecto, la parte nicaragüense fundamentó su argumento sobre la competencia de Honduras en la declaración presentada por ésta última el 20 de febrero de 1960, sin embargo, Honduras rebatió esta afirmación indicando que esa declaración había sido modificada por una declaración posterior realizada el 22 de mayo de 1986, y que fue entregada al Secretario General de las Naciones Unidas antes de la solicitud presentada por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, el 28 de julio de 1986⁹⁸, en donde se excluían las controversias relacionadas a:

...(i) cuestiones territoriales concernientes a la soberanía sobre las islas, los bancos y los cayos; las aguas interiores, los golfos y el mar territorial, su estatuto y sus límites, (ii) todos los derechos de soberanía en relación a su condición jurídica y los límites de la zona contigua, la zona económica exclusiva y la

⁹⁶ Ibíd. Pág. 5 y 6 Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010.

⁹⁷ Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, artículo 79 numeral 1.

⁹⁸ Naciones Unidas, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Nueva York, Publicación de las Naciones Unidas, Número de venta: S.92.V.5, 1992, Pág. 247 y 248. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010.

*plataforma continental; (iii) además del espacio aéreo sobre su territorio, las aguas y las zonas relacionadas en el enunciado anterior;...*⁹⁹

Todo esto en un intento por impedir una demanda del gobierno nicaragüense por el involucramiento de Honduras en los actos perpetrados en y contra Nicaragua.

Para la Corte la modificación a la Declaración de Aceptación de Honduras no fue suficiente, debido que Nicaragua manifestó que en 1950 Honduras había ratificado el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas también llamado “Pacto de Bogotá” sin ninguna reserva, aceptando ampliamente la jurisdicción de la Corte a través del artículo XXXI del mencionado Pacto, a parte de las declaraciones formuladas por ambos Estados, según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte.¹⁰⁰

En esta fase, Honduras presentó su memorial de acuerdo a los plazos determinados por la Corte, y expuso las siguientes excepciones solicitando que la Corte juzgue y declare:

Traducido al español

En cuanto a la admisibilidad:

La aplicación de Nicaragua es inadmisibile porque:

- 1. La solicitud es políticamente inspirada y artificial, la Corte no debería tratar por no tener el carácter jurídico.*
- 2. La aplicación es vaga y las alegaciones contenidas en ella no son apropiadamente particularizadas, por lo que la Corte no debe aceptar la aplicación sin tener un perjuicio sustancial por parte de Honduras.*
- 3. Nicaragua no ha podido demostrar, en opinión de las partes, que la controversia no ha podido ser manejada a través de negociaciones directas, y por tanto, Nicaragua ha fallado en satisfacer esta condición previa esencial según los procedimientos establecidos en el Pacto de Bogotá, que incluye como referencia las disputas de la Corte Internacional de Justicia.*
- 4. Al aceptar el proceso La Contadora como “procedimiento especial” de acuerdo al artículo II del Pacto de Bogotá, Nicaragua no está permitida por el artículo IV del Pacto y por consideraciones elementales de buena fe de iniciar*

⁹⁹ Corte Internacional de Justicia, Caso relativo a acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras) – Competencia y de la Corte y Admisibilidad de la solicitud de 20 de diciembre de 1988, Informes de 1988, Pág. 69, Lista General N° 74, año 1988, Pág. 16.

¹⁰⁰ Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 1991 a 31 de julio de 1992, Documentos oficiales: Cuadragésimo Séptimo Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/47/4), Nueva York, 1992. Pág. 7 Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010.

*cualquier otro arreglo pacífico hasta que el proceso la Contadora haya concluido; y ese tiempo no ha llegado*¹⁰¹.

En cuanto a la Jurisdicción:

- 1. La disputa alegada por Nicaragua está excluida de la jurisdicción de la Corte por los términos de la declaración de Honduras del 22 de mayo de 1986. Y ésta declaración se aplica si la jurisdicción se alega en base del artículo XXXI del Pacto de Bogotá o artículo 36 numeral 2 del Estatuto de la Corte.*
- 2. Por otro lado, el artículo XXXI del Pacto de Bogotá no puede ser invocado con independencia del artículo XXXII, misma que se opone a la aplicación unilateral de la Corte, a excepción de los procesos de conciliación que no hayan llegado a solución y cuando las partes no han convenido un procedimiento arbitral.
Ninguna de estas condiciones se cumple en el presente caso.*
- 3. No se puede alegar la jurisdicción del artículo 36 párrafo 1 del Estatuto de la Corte porque los Estados parte del Pacto de Bogotá han acordado que se debe cumplir con una de las condiciones el artículo XXXII y ninguna de las condiciones se han cumplido por parte de Nicaragua.*¹⁰²

Mientras que Nicaragua presentó su contra memoria, en el plazo establecido por la Corte, y pide que la Corte falle y declare, lo siguiente:

Traducido al español

- 1. Las modificaciones de la Declaración de Honduras de 20 de febrero de 1960 contenidas en la 'Declaración' de 22 de mayo de 1986 son inválidas y consecuentemente las "Reservas" invocadas por Honduras en su memorial no tienen efectos legales.*
- 2. Alternativamente, en caso de que la Corte encuentre que las modificaciones realizadas por Honduras en la Declaración del 22 de mayo de 1986 son válidas, estas modificaciones no pueden ser invocadas en contra de Nicaragua debido a que no ha existido una notificación debida con anterioridad.*
- 3. Sin perjuicio de lo anterior, las reservas invocadas por Honduras no son aplicables en circunstancia alguna al presente caso, por tanto:*
 - a. La disputa a la cual se refiere Nicaragua en la aplicación no está relacionada a los acuerdos de las partes para recurrir a otros medios sobre el arreglo pacífico de controversias; en particular, el proceso Contadora, ni las disposiciones del Pacto de Bogotá, constituyen 'otros medios' a los que se refiere la reserva pertinente, el conflicto que Nicaragua se refiere no está relacionado a una situación originada por conflictos armados o situaciones similares que pudieron afectar al territorio de la República de Honduras en donde éste se encuentre vinculado directa o indirectamente.*

¹⁰¹ Corte Internacional de Justicia, Caso relativo a acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras) – Competencia y de la Corte y Admisibilidad de la solicitud de 20 de diciembre de 1988, Informes de 1988, Pág. 69, Lista General N° 74, año 1988, Pág. 8.

¹⁰² Corte Internacional de Justicia, Caso relativo a acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras) – Competencia y de la Corte y Admisibilidad de la solicitud de 20 de diciembre de 1988, Informes de 1988, Pág. 69, Lista General N° 74, año 1988, Pág. 8 y 9.

Las ‘reservas’ en análisis no poseen un carácter preliminar exclusivo y por tanto es derecho que ésta aplicación sea pospuesta hasta determinar la etapa de los méritos.

4. *Las reservas invocadas por Honduras no son aplicables a lo dispuesto en el artículo XXXI del Pacto de Bogotá, que proporciona una base independiente de la competencia sin necesidad del marco del artículo 36, párrafo 1, del Estatuto de la Corte.*
5. *La aplicación de lo dispuesto en el artículo XXXI del Pacto de Bogotá no está sujeto al procedimiento de conciliación previsto en el artículo XXXII del Pacto, el agotamiento de los cuales es una condición del recurso ante el Tribunal exclusivamente en el contexto del artículo XXXII, o la condición de un acuerdo en un procedimiento arbitral que se refiere exclusivamente al artículo XXXII.*
6. *Los motivos de inadmisibilidad de la solicitud que supuestamente se derivan de las disposiciones de los artículos II y IV del Pacto de Bogotá, no tienen fundamento jurídico.*
7. *Todos los otros aspectos de inadmisibilidad alegados en el memorial de Honduras no tienen fundamento jurídico y deben ser rechazados.*
- B. *Como consecuencia de estas conclusiones el Gobierno de Nicaragua respetuosamente solicita a la Corte que juzgue y declare que:*
 1. *La Corte es competente en relación a las cuestiones planteadas en la Aplicación presentada por el Gobierno de Nicaragua el 28 de julio de 1986.*
 2. *La competencia de la Corte existe: en virtud de la declaración de Honduras de 20 de febrero de 1960 en donde acepta la jurisdicción de la Corte en conformidad con el artículo 36 párrafo 2, del Estatuto de la Corte; o (en caso de que la declaración haya sido válidamente modificada) la declaración de Honduras de 1960 ha sido modificada por la declaración de 22 de mayo de 1986, mientras que la declaración de Nicaragua fue el 24 de septiembre de 1929; y/o en virtud del artículo XXXI del Pacto de Bogotá y el artículo 36 numeral 1 del Estatuto de la Corte.*
 3. *La Aplicación de Nicaragua es admisible.*
- C. *Por estas razones el Gobierno de Nicaragua respetuosamente solicita a la Corte que declare que es competente o, alternatively, se reserve cualquier cuestión en donde no posea un carácter preliminar exclusivo para decisión en la etapa de los méritos.*
- D. *En relación a todas las cuestiones de hechos referidos en el memorial de Honduras no expresamente considerados en la presente Contra Memoria, el gobierno de Nicaragua se reserva su posición.¹⁰³*

Según la contra memoria presentada por Nicaragua, el Estado nicaragüense basó la competencia de la Corte en el artículo XXXI del Pacto de Bogotá y en el artículo 36 párrafos 1 y 2 del Estatuto de la Corte¹⁰⁴, mismas que tratan sobre las declaraciones de

¹⁰³ Corte Internacional de Justicia, Caso relativo a acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras) – Competencia y de la Corte y Admisibilidad de la solicitud de 20 de diciembre de 1988, Informes de 1988, Pág. 69, Lista General N° 74, año 1988, Pág. 9.

¹⁰⁴ Estatuto de la Corte.- Capítulo II – Competencia de la Corte Artículo 36 numeral 1. *La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. 2. Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias*

aceptación de la jurisdicción obligatoria hechas por las partes, debido al uso de la fuerza en contra de la integridad territorial, la soberanía y la independencia política del Estado de Nicaragua; además alega que Honduras, según el Pacto de Bogotá en su artículo I tiene la obligación de abstenerse de la amenaza, del uso de la fuerza o de cualquier otro medio de coacción para generar coerción como medio para solucionar disputas en el territorio nicaragüense; tal es así que, según la definición de agresión¹⁰⁵ dictada a través de la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Honduras debe respetar el derecho internacional que prohíbe secuestrar, matar o herir a ciudadanos de otros estados, en el caso específico, debe abstenerse de causar agresiones contra el pueblo y el territorio de Nicaragua; sin embargo, estas obligaciones y prohibiciones han sido quebrantadas por parte de Honduras al permitir que la *Contra* ocupe su territorio en la frontera con Nicaragua, además del apoyo directo a estos grupos contrarios por parte del Gobierno de Honduras, violando los principios y la costumbre internacional entre países hermanos.

Por otro lado, la Corte en su fallo recalca que en una carta de 13 de agosto de 1987 los agentes de Honduras y Nicaragua solicitaron el aplazamiento de la apertura de la vía oral, por un período de tres meses, en base a un acuerdo firmado por los presidentes de las dos Repúblicas el 7 de agosto de 1987¹⁰⁶, debido a éste acuerdo se logró llegar a ciertos entendimientos sobre el desmantelamiento de las bases utilizadas por las fuerzas de la *Contra* en el territorio de Honduras.

de orden jurídico que versen sobre: a. la interpretación de un tratado; b. cualquier cuestión de derecho internacional; c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional; d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional....

¹⁰⁵ Honduras ha ido en contra de la definición de agresión aceptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 3314, de 14 de diciembre de 1974, sobre la base de los informes de la Sexta Comisión que dice: “*Artículo I.- La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, ... a) se utiliza sin perjuicio de las cuestiones de reconocimiento o de que un Estado sea o no Miembro de las Naciones Unidas;...*”. Asamblea General, Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante el 29° período de sesiones – Resolución 3314 (XXIX) sobre la base de los informes de la Sexta Comisión, 2319ª. Sesión Plenaria – 14 de diciembre de 1974, Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, pág. 151 Internet: www.un.org Acceso: 7 de noviembre de 2010

¹⁰⁶ Corte Internacional de Justicia, Caso relativo a acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras) – Competencia y de la Corte y Admisibilidad de la solicitud de 20 de diciembre de 1988, Informes de 1988, Pág. 69, Lista General N° 74, año 1988, Pág. 7.

La adhesión de Nicaragua a este acuerdo se lo hizo por ser parte de la política de medidas constructivas destinadas a la aplicación de los acuerdos de Esquipulas y el restablecimiento de las condiciones normales para la región¹⁰⁷; pero, a pesar de las actividades realizadas por el gobierno nicaragüense, el gobierno de Honduras no cumplió con su parte del acuerdo, provocando que la situación siga siendo tensa, mientras que Honduras continuaba dando las facilidades necesarias a las fuerzas de la *Contra*, que no fueron retiradas ni reducidas a pesar de los compromisos acordados.

Es por esto que, el Gobierno de Nicaragua consideró necesario solicitar a la Corte Internacional de Justicia la ejecución de medidas provisionales de protección, el 21 de marzo de 1988; estas medidas de protección fueron solicitadas con el objetivo de contrarrestar la agresión contra Nicaragua e inducir la creación de un sistema de seguimiento que mejoraría las condiciones en la región fronteriza y permitiría comprobar las violaciones realizadas en y contra Nicaragua; sin embargo, el agente de Nicaragua solicitó que estas medidas sean levantadas a través de una carta enviada el 31 de marzo de 1988 por petición de su gobierno.¹⁰⁸

iv. Análisis de las excepciones de competencia presentadas por las partes.

A continuación, analizaremos las excepciones presentadas a la Corte por las partes en relación a su competencia:

1. Relación con el artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la Corte y sus declaraciones

En relación a la Declaración de Honduras de 22 de mayo de 1986¹⁰⁹, Nicaragua en su contra memoria y posteriormente la Corte, demostró que la reserva de Honduras en

¹⁰⁷ Ibid., Pág. 7.

¹⁰⁸ Ibid. Pág. 7.

¹⁰⁹ Corte Internacional de Justicia, Jurisdicción – Estados con derecho a comparecer ante la Corte – Declaraciones reconociendo como obligatoria la jurisdicción de la Corte - Honduras, Nueva York. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010.

relación al artículo 36 párrafo 2 es inválida y no tiene efectos legales¹¹⁰ por no haber sido comunicado a los demás Estados miembros de ésta nueva declaración de aceptación con reservas presentada por Honduras a pocos días antes de que la aplicación de Nicaragua sea presentada ante la Corte Internacional de Justicia; además, la parte nicaragüense argumentó que, en el caso que la Corte declare que estas nuevas reservas presentadas por Honduras en relación al artículo 36 párrafo 2 del Estatuto de la Corte y el Pacto de Bogotá, son jurídicamente válidas, no son aplicables en las circunstancias de este caso, y no pueden privar de la jurisdicción al Tribunal¹¹¹.

Por otro lado, es importante mencionar que las Declaraciones de Aceptación de la jurisdicción de la Corte por parte de Nicaragua y Honduras, según la contra memoria de Nicaragua, fueron realizados “*por un tiempo definido, a partir de la fecha en que es depositado ante el Secretario General de las Naciones*”¹¹², lo que significa que Honduras aceptó la competencia de la Corte sin reservas desde su inicio.

Recapitulando los hechos, Honduras aceptó la jurisdicción de la Corte basado en el artículo 36 numeral 2 el 2 de febrero de 1948 y depositó la mencionada declaración ante el Secretario General de las Naciones Unidas el 10 de febrero de 1948, en donde declaró que reconoce la competencia de forma *ipso facto* y sin necesidad de convenio especial en relación a otros Estados que acepten la mencionada jurisdicción de la Corte en controversias legales concernientes a los literales del numeral 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte; esta declaración se hace en base al principio de reciprocidad por un período de 6 años desde la fecha del depósito de la declaración ante el Secretario General de las Naciones Unidas¹¹³; posteriormente, el 24 de mayo de 1954 se presentó ante el Secretario General de las Naciones Unidas la renovación de la Declaración realizada el, ya mencionado, 2 de febrero de 1948, en donde se consintió la renovación

¹¹⁰ Documento presentado por el Embajador Carlos Arguello, agente de la República de Nicaragua, Contra memoria de Nicaragua (Competencia y Admisibilidad) Acciones fronterizas y transfronterizas, 22 de junio de 1987, Pág. 281.

¹¹¹ Ibíd., Pág. 281.

¹¹² Corte Internacional de Justicia, Caso relativo a acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras) – Competencia y de la Corte y Admisibilidad de la solicitud de 20 de diciembre de 1988, Informes de 1988, Pág. 69, Lista General N° 74, año 1988, Pág. 15 en concordancia con el documento presentado por el Embajador Carlos Arguello, agente de la República de Nicaragua, Contra memoria de Nicaragua (Competencia y Admisibilidad) Acciones fronterizas y transfronterizas, 22 de junio de 1987, Pág. 296.

¹¹³ Corte Internacional de Justicia, Informes de los fallos, opiniones consultivas y providencias – Caso relativo a Acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras), competencia y admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Informes 1988, Pág. 13 y 14.

tácita (*por un período de seis años, renovable por reconducción*)¹¹⁴; lo que significa que Honduras declaró la aceptación de la competencia de la Corte y su automática renovación, siendo esta afirmación una indudable manifestación de aceptación de la jurisdicción de la Corte de forma indefinida; sin embargo, contrario a su manifestación de 20 de febrero de 1960, el 22 de mayo de 1986 Honduras presentó una nueva declaración en donde incluye por primera vez las siguientes reservas:

Traducido al español

- a) *Controversias respecto de las cuales las partes hayan acordado o acuerden recurrir a otros medios para el arreglo pacífico de controversias;*
 - b) *Controversias relacionadas a materias de jurisdicción interna de la República de Honduras en virtud del derecho internacional.*
 - c) *Controversias relativas a hechos o situaciones originarias de los conflictos armados o actos de carácter similar que puedan afectar al territorio de la República de Honduras y en las que pueda verse involucrado directa o indirectamente;*
 - d) *Controversias relacionadas a:*
 - a. *Temas territoriales relacionados a la soberanía sobre islas, bancos de arena y cayos; aguas interiores, bahías, el mar territorial, su condición jurídica y sus límites;*
 - b. *Todos los derechos de soberanía o jurisdicción relacionados a la condición jurídica y los límites de la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.*
 - c. *El espacio aéreo sobre los territorios, las aguas y las zonas contempladas en el presente apartado.*
- 3.- *El Gobierno de Honduras también se reserva el derecho en cualquier momento a completar, modificar o retirar esta declaración o las reservas que figuran en el a través de una notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.*
- 4.- *La presente declaración sustituye a la Declaración realizada por el Gobierno de Honduras el 20 de febrero de 1960.*¹¹⁵

Al respecto, Nicaragua cuestiona si una Declaración de Aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte por tiempo indefinido o de renovación tácita puede ser modificada de forma unilateral¹¹⁶. Según el profesor R. P. Anand¹¹⁷, cuando un Estado ha hecho una

¹¹⁴ Ibid. pág. 14.

¹¹⁵ Corte Internacional de Justicia, Jurisdicción – Estados con derecho a comparecer ante la Corte – Declaraciones reconociendo como obligatoria la jurisdicción de la Corte - Honduras, Nueva York. Internet: www.icj-cij.org Acceso: 7 de noviembre de 2010. En concordancia con la Corte Internacional de Justicia, Informes de los fallos, opiniones consultivas y providencias – Caso relativo a Acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras), competencia y admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Informes 1988, Pág. 15 y 16.

¹¹⁶ Traducido al español.- Este texto difiere de las declaraciones anteriores realizadas por Honduras, el 2 de febrero de 1948 y el 19 de abril de 1954, ambos determinaron que sería por un periodo de 6 años – el primero sin dar otros detalles, mientras que la segunda declaración mencionó la posibilidad de una renovación tácita. Por tanto lo que se debe definir es si un Estado

declaración sin ninguna disposición para su terminación no tiene derecho para cancelarla frente a los demás Estados aceptantes con períodos fijos y determinados, a excepción de contar con el consentimiento de estos. De lo contrario no se justifica la declaración de terminación a menos que se tome como referencia una regla especial relacionada a la terminación de los tratados tales como la *rebus sic stantibus*¹¹⁸, que se utiliza para adecuar el contenido del tratado a las nuevas circunstancias¹¹⁹; además indica que, en principio, no existe un derecho de rescisión unilateral o modificación de una declaración en virtud de una *Cláusula Opcional*, a menos que el derecho haya sido reservado expresamente en la declaración¹²⁰, podemos confirmar que la declaración de Honduras de 1986 no es válida ni tiene efectos legales.

Por otro lado, la Corte en varios de sus fallos ha manifestado que el Estado que deposita la Declaración de Aceptación ante el Secretario General de las Naciones Unidas forma parte del sistema de la *Cláusula Opcional* con todos los derechos y obligaciones que se derivan del artículo 36 del Estatuto de forma *ipso facto y sin acuerdo especial*¹²¹, es por esto que se puede afirmar que el Estado acepta la competencia de la Corte para tratar los temas que se le presenten para su análisis y posterior juzgamiento.

Como se menciona en el fallo del caso *Actividades Armadas entre la República Democrática del Congo contra Ruanda*, no basta con la notificación de carácter internacional de la nueva declaración de aceptación, sino que, para que se la considere como suficiente, incluso si ésta declaración es realizada a través de decreto-ley y con

que ha realizado la Declaración de Aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte por “un tiempo indefinido” pueda modificar o rescindir a dicha Declaración. La respuesta solo puede ser negativa. Cualquier otro enfoque sería incompatible con el sistema de la Cláusula Opcional. Documento presentado por el Embajador Carlos Arguello, agente de la República de Nicaragua, Contra memoria de Nicaragua (Competencia y Admisibilidad) Acciones fronterizas y transfronterizas, 22 de junio de 1987, Pág. 297.

¹¹⁷ *Ibíd.*, pág. 302.

¹¹⁸ Traducido al español.- Esto normalmente significaría que un Estado cuando ha realizado su declaración sin ningún tipo de prestación para su terminación no tendría derecho a cancelarlo, frente a otros Estados que tienen declaraciones de períodos fijos, salvo su consentimiento. De lo contrario la terminación de la Declaración no se justifica a excepción de alguna regla especial relativa a la terminación de los tratados, tales como, la doctrina de la *Rebus sic stantibus*. La Jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, Editorial Asia, Londres, 1961, p. 177, *Ibíd.*, Pág. 302

¹¹⁹ “... en virtud de la misma, las obligaciones subsistían mientras las circunstancias originales no hubieran experimentado fundamental modificación.” Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Argentina, Editorial Heliasta, Decimosexta edición, 2003, Pág. 72

¹²⁰ *Op. Cit.*, pág. 302

¹²¹ Corte Internacional de Justicia, Derecho de paso por territorio indio, Objeciones Preliminares, I.C.J. Reportes 1957, p. 146 – *Op. Cit.*, Pág. 298

publicación en un diario oficial de la República¹²², es necesario informar masivamente, siguiendo el procedimiento de la Corte y de las Naciones Unidas, para dar a conocer al resto de Estados aceptantes sobre alguna modificación o terminación de alguno de los tratados suscritos por ese Estado.

Es importante recalcar que no habrá una solución jurisdiccional de la controversia si no existe el consentimiento de los Estados parte; este consentimiento¹²³ se lo puede obtener a través de varias vías:

- A *posteriori* es cuando ya surgida la controversia se realiza un acuerdo expreso llamado compromiso o cuando este acuerdo se encuentra implícito o tácito, lo que ha dado lugar al principio del *fórum prorrogatum*¹²⁴.
- A *priori* es cuando antes de nacida la controversia el consentimiento puede manifestarse de forma convencional, ya sea por vía unilateral¹²⁵ o a través de tratados o convenios bilaterales o multilaterales, tales como: la Convención Europea para el Arreglo Pacífico de las Controversias (1957), el Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (1948), entre otros.

¹²² Jorge Antonio Quindimil López, Las normas de ius cogens y el consentimiento de los Estados ante la Corte Internacional de Justicia: ¿Hacia un nuevo fundamento de jurisdicción? (Comentarios sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 3 de febrero de 2006, Actividades Armadas sobre el territorio del Congo, República Democrática del Congo contra Ruanda, nueva demanda de 2002, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, número 12, 2006, pág. 6 Internet: www.reei.org Acceso: 9 de mayo de 2009

¹²³ “El consentimiento es pieza esencial del procedimiento internacional, pues, como ha sido señalado, la justicia internacional es facultativa y la competencia del Tribunal continúa fundada sobre el consentimiento de los Estados” (REUTER: 586)” Manuel Díez de Velasco, Instituciones de Derecho Internacional Público, ed. Tecnos, Madrid, 1973, pág. 755 y 756.

¹²⁴ “El Principio del *fórum prorrogatum* permite que la aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte una vez surgida la controversia y hasta incoado el procedimiento pueda resultar, no de un acuerdo expreso plasmado en el compromiso, sino de actos separados y sucesivos o, incluso, se deduzca de actos concluyentes de las partes, particularmente del demandado, como sería la contestación a la demanda o la personación en el proceso sin plantear la excepción de falta de jurisdicción. Si bien la jurisdicción de la Corte depende de dicho consentimiento, éste no ha de someterse o subordinarse a la observancia de una forma determinada...” Antonio Remiro Brotons y otros, Derecho Internacional, Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 1997, pág. 870

¹²⁵ José Antonio Pastor Ridruejo, Curso de Derecho Internacional Público y Organismos Internacionales, ed. Tecnos, Madrid, 1980, pág. 722 y 723.

Un hecho importante en relación a las acciones efectuadas por Honduras en cuanto a la aceptación de la competencia de la Corte Internacional de Justicia se dio en un caso anterior entre Honduras y El Salvador, en donde Honduras se opuso y protestó frente a un intento de El Salvador de sustituir la declaración de 1921 y ratificado en 1930, haciendo referencia a las opiniones de autoridades renombradas en el Derecho Internacional en donde recalcan que a menos que la declaración desde un inicio indique reservas a la aceptación de la declaración, no se pueden hacer de forma posterior a la primera aceptación, bajo el argumento que sería aceptar que el Estado pueda comparecer ante la Corte para buscar solución a litigios en los que sea parte y en donde posea intereses específicos a su favor, alterando de esta manera el principio de aplicación universal sobre el respeto a los tratados y principios del Derecho Internacional¹²⁶; tal es así que Honduras impugnó la intención de El Salvador de renovar y sustituir su declaración de aceptación con reservas; mientras que, en el caso en estudio, Honduras se encuentra actuando de la misma manera que El Salvador a pesar de haber cuestionado fuertemente su actitud sobre la modificación de las declaraciones de aceptación y las reservas; es en esa carta que Honduras dijo lo siguiente:

Traducido al español

*Consideramos que es apropiado notar en esta conexión, que mi país, leal a su tradición de respeto total a las normas y procedimientos internacionales, ha aceptado el Estatuto de la Corte **sin reservas de ningún tipo**, ya que reconoce que estas instituciones representan las formas más apropiadas para solucionar conflictos entre Estados; notamos también que, con profunda fe en los principios del derecho, hemos cumplido siempre con los laudos arbitrales o las decisiones judiciales producto de las disputas que han sido presentadas para su solución, independientemente de la decisión del Tribunal de Justicia.¹²⁷ Las negritas son mías.*

Con ésta declaración y lo mencionado anteriormente sobre su posición contraria a la actuación de El Salvador, se pueden constatar claramente las intenciones positivas de parte de Honduras para acatar y aceptar la jurisdicción de la Corte, así como su postura frente a la modificación de las declaraciones de aceptación, especialmente en relación a las reservas.

¹²⁶ Documento presentado por el Embajador Carlos Arguello, agente de la República de Nicaragua, Contra memoria de Nicaragua (Competencia y Admisibilidad) Acciones fronterizas y transfronterizas, 22 de junio de 1987, pág. 303

¹²⁷ Documento presentado por el Embajador Carlos Arguello, agente de la República de Nicaragua, Contra memoria de Nicaragua (Competencia y Admisibilidad) Acciones fronterizas y transfronterizas, 22 de junio de 1987, pág. 304.

2. Pacto de Bogotá, artículos XXI y XXXII

En cuanto al Pacto de Bogotá, como lo mencionamos anteriormente, Honduras declaró su aceptación y posterior ratificación, sin modificación o reserva alguna, el 13 de enero de 1950 misma que fue depositada el 7 de febrero del mismo año¹²⁸; sin embargo, a pesar de estos hechos, Honduras mantuvo una posición contraria a las reglas generales que se deben aplicar en la interpretación de los tratados, especialmente, en el caso en estudio, sobre la interpretación del artículo XXXI del mencionado Pacto que dice:

*“... las Altas Partes Contratantes declaran que **reconocen** respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la **jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas** ...”*¹²⁹ Las negritas son mías.

Al respecto, en éste artículo se puede ver claramente la intención que tienen los Estados aceptantes y la actitud recíproca que éstos deben tener respecto de sus similares sobre la competencia de la Corte Internacional de Justicia para las llamadas *controversias de orden jurídico*, pero, a pesar de haber aceptado, firmado y ratificado el mencionado tratado, Honduras no acepta la competencia de la Corte y manifiesta en una de sus excepciones que los artículos XXXI y XXXII deberían leerse en conjunto y no en forma separada, ya que el primero habla sobre el alcance o el ámbito de la competencia de la Corte y el segundo deduce que sólo se podrá recurrir a la Corte si previamente se ha intentado la conciliación y no se haya convenido un procedimiento arbitral, es decir, la Corte determina las condiciones bajo las cuales ésta puede conocer una controversia;¹³⁰ situación que no se ha realizado en el caso en estudio.

¹²⁸ Organización de los Estados Americanos, Departamento de Derecho Internacional – Tratados Multilaterales, Washington DC. Internet: www.oas.org Acceso: 19 de noviembre de 2010

¹²⁹ Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá, artículo XXXI.

¹³⁰ Corte Internacional de Justicia, Caso relativo a acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras) – Competencia y de la Corte y Admisibilidad de la solicitud de 20 de diciembre de 1988, Informes de 1988, Pág. 69, Lista General N° 74, año 1988, Pág. 23.

Por otro lado, la parte nicaragüense argumenta que los artículos XXXI¹³¹ y XXXII¹³² del Pacto de Bogotá, son dos disposiciones autónomas puesto que cada uno confiere competencia a la Corte de formas distintas; la primera fue concebida para temas jurídicos que han sido sometidos a arbitraje en virtud del Tratado General de Arbitraje Interamericano de 5 de enero de 1929, y la segunda fue creada con la intención de dar lugar al resto de temas que no necesariamente estaban vinculados con el tema jurídico, en el ámbito del Convenio General de Conciliación Interamericana; es decir, las partes pueden acceder a la competencia de la Corte en virtud del artículo XXXI sin que sea necesario determinar si se ha satisfecho con las condiciones de procedimiento establecidos en el artículo XXXII¹³³.

También Nicaragua argumenta, en su contra memoria, que los artículos XXXI y XXXII son disposiciones autónomas pues cada una de ellas confiere la competencia a la Corte en situaciones diferentes, ya que en el artículo XXXI del Pacto de Bogotá se trata asuntos de naturaleza jurídica, de las enumeradas en el artículo 36 párrafo 2 del Estatuto de la Corte, mientras que en el artículo XXXII no existe ésta limitación y, por tanto, cubre cualquier tipo de conflicto o disputa sobre un amplio espectro de posibilidades; Nicaragua hace una recapitulación sobre las diferencias entre los mencionados artículos del Pacto de Bogotá que se remonta a los años 1929, en los tratados de arbitraje y conciliación, en donde indica que el primero fue creado por el arbitraje sobre disputas jurídicas, y el segundo desde la conciliación de conflictos de cualquier tipo,¹³⁴ incluyendo las controversias políticas; es decir, a través del Pacto de Bogotá se acepta la competencia de la Corte

¹³¹ Pacto de Bogotá, Capítulo Cuarto Procedimiento Judicial Artículo XXXI De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, *las Altas Partes Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre: a) La interpretación de un Tratado; b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional; c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría la violación de una obligación internacional; d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.*

¹³² Pacto de Bogotá, Artículo XXXII “*Cuando el procedimiento de conciliación anteriormente establecido, conforme a este Tratado o por voluntad de las partes, no llegare a una solución y dichas partes no hubieren convenido en un procedimiento arbitral, cualquiera de ellas tendrá derecho a recurrir a la Corte Internacional de Justicia en la forma establecida en el artículo 40 de su Estatuto. La Jurisdicción de la Corte quedará obligatoriamente abierta conforme al párrafo 1 del artículo 36 del mismo Estatuto*”

¹³³ Corte Internacional de Justicia, Caso relativo a acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras) – Competencia y de la Corte y Admisibilidad de la solicitud de 20 de diciembre de 1988, Informes de 1988, Pág. 69, Lista General N° 74, año 1988, Pág. 23

¹³⁴ Documento presentado por el Embajador Carlos Arguello, agente de la República de Nicaragua, Contra memoria de Nicaragua (Competencia y Admisibilidad) Acciones fronterizas y transfronterizas, 22 de junio de 1987, pág. 324

para conocer las controversias entre los Estados americanos aceptantes y, en su defecto, la Corte organiza un sistema arbitral como medio alternativo para la solución de conflictos que no necesariamente tengan relación con temas jurídicos.

En este punto es importante mencionar que Nicaragua en su contra memoria enfatizó algunas citas de autores que Honduras no tomó en cuenta en su memoria sobre la interpretación que se debe hacer a los artículos XXXI y XXXII del Pacto de Bogotá, como por ejemplo, el profesor José J. Caicedo Castilla, Vicepresidente del Comité Jurídico Interamericano, quien afirma en su obra *El Derecho Internacional en el Sistema Interamericano* (Madrid, 1970) que el Pacto ofrece dos diferentes modos de acceso a la Corte y uno de ellos es el artículo XXXI, ya que no tiene condición previa de conciliación, y dice¹³⁵:

Traducido al español

El Pacto atribuye en general el conocimiento de las controversias entre los Estados americanos a la Corte Internacional de Justicia, y en defecto de esta organiza un sistema arbitral.

De modo que la Corte conocerá:

- 1) de las controversias de carácter jurídico, tal como las enumera el art. 36 del Estatuto de la Corte;*
- 2) de las controversias no jurídicas respecto de las cuales las partes no hayan llegado a una solución en el procedimiento de conciliación y no hayan concordado en solucionarlas por medio del arbitraje. Por consiguiente, en este segundo caso hay una restricción: no pueden las partes o una de ellas acudir directamente a la Corte sino que están obligadas a someterse previamente al procedimiento de conciliación. Solo por el fracaso de este procedimiento adquiere competencia la Corte, y además de eso las partes deben comprobar que no concordaron en someter la diferencia a arbitraje.¹³⁶*

Con todo esto, la Corte se pronuncia diciendo que la interpretación de Honduras del artículo XXXII va en contra de su redacción¹³⁷, puesto que en éste artículo no se hace referencia al artículo XXXI como Honduras sugiere, sino que, según el criterio de la Corte, se puede deducir que la finalidad de los Estados americanos al momento de crear éstos artículos era el de reforzar los compromisos mutuos en relación a las soluciones judiciales de las futuras controversias, es decir los artículos XXXI y XXXII son dos formas

¹³⁵ *Ibíd.*, pág. 328

¹³⁶ *Ibíd.*

¹³⁷ Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, Pág. 248

distintas de acceso a la competencia de la Corte¹³⁸; es por eso que, en el caso en estudio, Nicaragua optó por la primera forma de acceso al fundamentar la competencia de la Corte en el artículo XXXI.

Tal es así que la Corte en su sentencia concluye diciendo:

Traducido al español

En resumen, los artículos XXXI y XXXII establecen dos formas distintas de acceso a la Corte. La primera se refiere a los casos en donde la Corte conoce directamente y el segundo en donde las partes inicialmente recurren a la conciliación.

En el presente caso, Nicaragua se ha basado en el artículo XXXI, no en el artículo XXXII. En consecuencia no es pertinente analizar si la controversia fue sometida a conciliación, ni la interpretación que realiza el artículo XXXII en otros aspectos, en particular en lo que respecta a la naturaleza y el objeto de los litigios en los que el texto se aplica. Es suficiente para la Corte encontrar que la segunda objeción presentada por Honduras está basada en una interpretación incorrecta del artículo y, por esa razón, no puede ser aceptada.

*En el artículo XXXI del Pacto de Bogotá, se confiere la jurisdicción a la Corte para conocer las controversias sometidas a esta. Es por esta razón, que la Corte no necesita considerar si existe o no competencia en virtud de las declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria de Nicaragua y de Honduras...*¹³⁹

Mientras tanto el magistrado Oda, en su opinión separada, manifiesta que a pesar de haber votado a favor de la sentencia destaca que los artículos XXXI y XXXII están interrelacionados esencialmente y el procedimiento de conciliación previsto en el artículo XXXII es un requisito previo del recurso a un procedimiento judicial, además agrega que el Pacto de Bogotá no debe ser interpretado de forma diferente y que el Tribunal niega que el artículo XXXI se considera como una declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria en virtud del artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la Corte¹⁴⁰; menciona también que ex el Secretario General, Dr. García Amador, afirmaba que la solución de controversias debe ser en virtud del artículo XXXI en donde las partes reconocen como obligatoria *ipso facto* y sin necesidad de convenio especial a través de la firma del Tratado; sin embargo, la naturaleza de las medidas judiciales en relación con el procedimiento de conciliación establecido en el Pacto no ha llegado a una solución y las

¹³⁸ *Ibíd.* Pág. 249.

¹³⁹ Corte Internacional de Justicia, Acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua y Honduras) Jurisdicción y admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Reportes 1988, Págs. 24 y 25.

¹⁴⁰ Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, Pág. 251.

partes no han acordado un procedimiento arbitral. Sólo en estas circunstancias puede una de las partes ejercer su derecho a recurrir a la Corte y a su jurisdicción según el artículo XXXII¹⁴¹.

Sus dudas se basan en la atribución de la competencia de la Corte en virtud del artículo XXXI, ya que como se indica en la sentencia está bien fundamentado; expresa además que ha concluido que la interpretación de la Corte sobre los artículos XXXI y XXXII del Pacto de Bogotá aparecen mucho menos convincentes si se observa el significado de los mismos en los términos del Pacto y su contexto; y, compara el Pacto con dos tratados multilaterales vigentes que tienen como propósito principal el arreglo pacífico de las controversias, especialmente sobre la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia, que son: el Acta General revisada para el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1949 y el Convenio Europeo para la Solución Pacífica de Controversias aprobada por Estrasburgo en 1957¹⁴².

El Juez Oda enfatiza que no hay otro tratado o convenio en donde se incluya la obligación amplia de la jurisdicción de la Corte y nunca ha existido; es por esto que, llega a una interpretación alternativa del artículo XXXII en donde dice que el mencionado artículo tiene significado si las condiciones se encuentran calificadas por la jurisdicción de la Corte en el artículo anterior, es decir, en el XXXI. En otras palabras, las partes podrían acudir a la jurisdicción de la Corte cuando se trate de controversias previstas en el artículo XXXI según lo establecido en el artículo XXXII¹⁴³; y, menciona que el artículo XXXII, es el mismo que el del artículo anterior (artículo XXXI) por tanto también está sujeto a las condiciones de dicho artículo¹⁴⁴.

Por otro lado, el magistrado Schwebel en su opinión separada concluye diciendo:

Traducido al español

¹⁴¹ Corte Internacional de Justicia, Opinión Separada del Juez Oda, 45 y 46.

¹⁴² Corte Internacional de Justicia, Opinión separada del Juez Oda, 46.

¹⁴³ *Ibíd.*, 48.

¹⁴⁴ *Op. Cit.*, Pág. 48.

*Yo no encuentro en los análisis abreviados de estas autoridades razones que me lleven a concluir que la construcción del artículo XXXI está relacionado a la competencia de la Corte como independiente del artículo XXXII, pues carece de fundamento.*¹⁴⁵

Es decir, el juez Schwebel se encuentra a favor del argumento de Honduras que dice que ambos artículos no son independientes el uno del otro sino que van de la mano; aunque, también concuerda que la Corte pudo haber creado estos dos artículos para dar opción a dos rutas para llegar a la jurisdicción de la Corte, la una del lado jurídico y la otra para disputas de naturaleza variada¹⁴⁶.

En cuanto a la opinión separada del juez Shahabuddeen, este concuerda que los artículos XXXI y XXXII, juntos o separados, confieren jurisdicción a la Corte para juzgar controversias¹⁴⁷; pero también indica que existe un problema en la decisión de la Corte, ya que concluye su jurisdicción en el artículo XXXI del Pacto de Bogotá sin indicar que ésta jurisdicción es aplicada bajo el artículo 36 párrafo 1 o párrafo 2 del Estatuto¹⁴⁸.

3. Interpretación del artículo 36 párrafo 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y el artículo XXXI del Pacto de Bogotá.

Según Honduras, no se puede alegar la jurisdicción del artículo 36 párrafo 1 del Estatuto de la Corte porque los Estados parte del Pacto de Bogotá han acordado que se debe cumplir con una de las condiciones el artículo XXXII y ninguna de las condiciones se han cumplido por parte de Nicaragua; sin embargo, Nicaragua contesta ésta excepción diciendo que las reservas invocadas por Honduras no son aplicables a lo que dispone el artículo XXXI del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, ya que su contenido otorga la competencia de la Corte sin necesidad del artículo 36 numeral 1 del Estatuto de la Corte.

Con todo esto, la Corte manifestó en el fallo de 20 de diciembre de 1988 que ésta

¹⁴⁵ Corte Internacional de Justicia, Opinión separada del Juez Schwebel, Pág. 61.

¹⁴⁶ Ibid. Pág. 61.

¹⁴⁷ Corte Internacional de Justicia, Opinión separada del Juez Shahabuddeen, Pág. 61.

¹⁴⁸ Ibid. Pág. 74.

interpretación de Honduras es errada puesto que es incompatible con la redacción del artículo en cuestión, además menciona que sólo se pueden modificar los acuerdos bajo las normas preestablecidas en el propio Pacto¹⁴⁹; y, en ningún lugar del artículo XXXI se prevé que los compromisos contraídos por las partes en el Pacto puedan ser enmendados por medio de una declaración unilateral hecha posteriormente, puesto que la referencia del artículo 36 párrafo 2 del Estatuto no basta por sí misma para lograr ese efecto¹⁵⁰.

Estas relaciones entre el artículo XXXI del Pacto de Bogotá y el artículo 36 del Estatuto de la Corte fueron ampliamente discutidas y analizadas en el Tercer Comité de la Conferencia realizada en Bogotá en donde se firmó el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas¹⁵¹ con la aceptación de los Estados presentes, sin embargo, muchos de ellos anotaron sus excepciones o reservas al momento de expresar su adhesión.

Es por esto que la Corte concluyó diciendo que el compromiso adquirido en el artículo XXXI del Pacto es independiente de las Declaraciones de Aceptación de la jurisdicción obligatoria que puedan haberse hecho con arreglo al párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto; y, no acepta el argumento de Honduras relacionado a la reserva realizada de forma posterior a la Declaración de Aceptación a fin de declarar la no competencia para éste caso¹⁵².

¹⁴⁹ Traducido al español.- Sin embargo, no existe la necesidad de continuar con éste argumento. Incluso si la lectura de Honduras en relación al artículo XXXI ha sido adoptada, y el artículo sea considerado como una declaración colectiva de aceptación de la jurisdicción obligatoria de conformidad con el artículo 36, párrafo 2, es preciso señalar que dicha declaración fue incorporada en el Pacto de Bogotá en el artículo XXXI. En consecuencia, solo puede ser modificado de conformidad con las normas establecidas en el propio Pacto. Corte Internacional de Justicia, Acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua y Honduras) Jurisdicción y admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Reportes 1988, Pág. 19.

¹⁵⁰ Traducido al español.- En ninguna parte del artículo XXXI se prevé que el compromiso suscrito por las partes en el Pacto pueda ser modificado a través de una declaración unilateral en virtud del Estatuto y en referencia al artículo 36, párrafo 2, el Estatuto es insuficiente en sí mismo para obtener este efecto. Ibíd., Pág. 19.

¹⁵¹ Óp. Cit. Pág. 20.

¹⁵² Traducido al español.- En estas circunstancias, la Corte tiene que concluir que el compromiso del artículo XXXI del Pacto es independiente de las declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria que hayan sido realizadas en virtud del artículo 36, párrafo 2, del Estatuto y depositadas en la Secretaría General de las Naciones Unidas de conformidad con el párrafo 4 del mismo artículo. En consecuencia, no es necesario decidir si la Declaración de 1986 de Honduras es oponible a Nicaragua en este caso; no puede en ningún caso restringir el compromiso que Honduras aceptó en virtud del artículo XXXI. Por lo tanto, el argumento de Honduras en cuanto al efecto de la reserva a su Declaración de 1986 sobre su compromiso en virtud del artículo XXXI del Pacto no puede ser aceptada Corte Internacional de Justicia, Caso relativo a acciones armadas

b. Admisibilidad de la Corte Internacional de Justicia

A fin de analizar la decisión de la Corte para determinar sobre la admisibilidad o no de la aplicación presentada por Nicaragua y la excepción preliminar propuesta por Honduras sobre la competencia y admisibilidad del caso *Conflictos Armados Fronterizos y Transfronterizos entre Nicaragua y Honduras*, es necesario enfatizar que antes de entrar a analizar el fondo de la controversia, es deber de la Corte el analizar el documento presentado por la parte demandante para, posteriormente, declarar si hay o no motivos para concluir que no se deba aceptar dicha solicitud, además la Corte debe constatar que no existan incompatibilidades de forma general.¹⁵³

Es necesario mencionar que si en el análisis preliminar de competencia y admisibilidad la Corte encuentra motivos para concluir que no se puede o no se debe conocer sobre el asunto o controversia puesto en su conocimiento, se deberá emitir un fallo indicando los motivos por los cuales no se admite la causa interpuesta.¹⁵⁴

i. Análisis del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia el 20 de diciembre de 1988 entre Nicaragua y Honduras, excepciones de admisibilidad

A continuación analizaremos las excepciones presentadas por las partes sobre la admisibilidad de la aplicación presentada por Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.

1. “La solicitud es políticamente inspirada y artificial”

fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras) – Competencia y de la Corte y Admisibilidad de la solicitud de 20 de diciembre de 1988, Informes de 1988, Pág. 69, Lista General N° 74, año 1988, Pág. 23.

¹⁵³ Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Naciones Unidas, Nueva York, 1992 Págs. 154 y 155.

¹⁵⁴ *Ibíd.*

Antes de entrar a analizar estas afirmaciones, es importante mencionar que Nicaragua de forma amplia y general manifestó que los argumentos planteados por Honduras sobre la inadmisibilidad de la solicitud no tienen fundamento jurídico y, por tanto, deben ser rechazadas¹⁵⁵; mientras que, la excepción presentada por Honduras tiene dos aspectos: el primero es el tema *políticamente inspirada* que argumenta ha sido motivo para la presentación de la solicitud ante la Corte Internacional de Justicia; y, el segundo es el carácter de *artificial o arbitraria* de la antes mencionada solicitud.

En cuanto a la frase *políticamente inspirada*, la Corte conocedora de los antecedentes políticos del caso en estudio, afirmó que no se encuentra facultada ni tiene la posibilidad de influir o juzgar sobre las motivaciones políticas de los Estados en ciertos momentos o circunstancias¹⁵⁶, además, fue muy clara en enfatizar que todos los conflictos tienen aspectos políticos y jurídicos¹⁵⁷, con más razón cuando se trata del ámbito internacional, ya que las relaciones entre Estados deben siempre ser tratados de forma política y diplomática.

Es por éste motivo que la Corte ha sido muy clara en manifestar que es su deber el asumir la jurisdicción de los casos que se le presenten independientemente de los antecedentes políticos que éstos puedan tener, siempre y cuando el tema a tratar tenga contenido jurídico en donde la Corte pueda entrar a analizar y posteriormente juzgar, es así que declaró en su opinión consultiva de 20 de julio de 1962 que:

Traducido al español

Se ha argumentado que la cuestión planteada ante la Corte se entrelaza con cuestiones políticas y por esa razón la Corte debería negarse de dar una opinión. Es verdad que la mayoría de las interpretaciones de la Carta de las Naciones Unidas tienen un significado político, grande o pequeño. En la naturaleza de las cosas no podría ser de otra manera. La Corte, sin embargo, no se puede atribuir

¹⁵⁵ Corte Internacional de Justicia, Caso relativo a acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua c. Honduras) – Competencia y de la Corte y Admisibilidad de la solicitud de 20 de diciembre de 1988, Informes de 1988, Pág. 69, Lista General N° 74, año 1988, Pág. 9.

¹⁵⁶ Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, Pág. 249.

¹⁵⁷ Corte Internacional de Justicia, Acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua y Honduras) Jurisdicción y admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Reportes 1988, Pág. 26.

*un carácter político a una petición que invita a emprender una tarea judicial, es decir, la interpretación de una disposición de un tratado.*¹⁵⁸.

Por otro lado, en relación a la afirmación realizada por Honduras sobre el carácter *artificial o arbitrario* de la solicitud presentada, la Corte se pronunció de la siguiente manera:

*En cuanto a la opinión de Honduras de que el resultado global de la actuación de Nicaragua es “una división artificial y arbitraria del conflicto general existente en Centroamérica”, la Corte recuerda que, si bien no hay duda de que puede considerarse que la cuestión sometida a la Corte forma parte de un problema regional más amplio, “ninguna disposición del Estatuto o el Reglamento prevé que la Corte deba negarse a conocer de un aspecto de una controversia, simplemente porque esa controversia tiene otros aspectos, por importantes que éstos sean...”*¹⁵⁹

2. “La aplicación es vaga y las alegaciones que figuran en ella no están debidamente detalladas”

Otra excepción presentada por Honduras es que la solicitud es vaga y las alegaciones no están debidamente detalladas; al respecto, la Corte se pronunció diciendo que la solicitud presentada por Nicaragua reúne los requisitos indicados en el Estatuto y Reglamento de la Corte¹⁶⁰, por tanto, ha sido posible determinar el objeto de la controversia y la naturaleza de lo que se demanda, así como está acompañada de una exposición completa de los hechos y los fundamentos de derecho¹⁶¹.

Por otro lado, es importante mencionar que la parte nicaragüense ha demostrado que no existe similitud en el objeto y la naturaleza de éste proceso con el que Nicaragua presentó en contra de Estados Unidos por violaciones al derecho internacional al apoyar a la oposición armada, es decir, la *Contra*, en su conflicto con el pueblo nicaragüense, en donde Estados Unidos fue condenado a resarcir los daños ocasionados por violar las normas del derecho internacional, y que no cumplió con la mencionada sentencia bajo el

¹⁵⁸ Corte Internacional de Justicia, Ciertos casos de las Naciones Unidas – Opinión Consultiva de 20 de Julio de 1962, I.C.J. Reportes 1962, p. 151, Pág. 8.

¹⁵⁹ Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, Pág. 249.

¹⁶⁰ *Ibíd.*

¹⁶¹ *Óp. Cit.*

argumento que sus acciones constituyeron actos de defensa propia colectiva, misma que fue publicada el 27 de junio de 1986, caso que fue detallado en capítulo anterior.

3. Pacto de Bogotá, artículo II

En esta excepción, Honduras se basó en el artículo II del Pacto de Bogotá, que dice:

Las Altas Partes Contratantes reconocen la obligación de resolver las controversias internacionales por los procedimientos pacíficos regionales antes de llevarlas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En consecuencia, en caso de que entre dos o más Estados signatarios se suscite una controversia que, en opinión de las partes, no pueda ser resuelta por negociaciones directas a través de los medios diplomáticos usuales, las partes se comprometen a hacer uso de los procedimientos especiales que, a su juicio, les permitan llegar a una solución¹⁶².

Además, afirmó que Nicaragua ha fallado en demostrar la “manifestación¹⁶³” en donde se compruebe que la disputa no puede ser solucionada a través de negociaciones directas, incumpliendo con el enunciado del artículo II del Pacto de Bogotá, a pesar de ser ésta una condición previa para recurrir a los procedimientos establecidos en el mencionado Pacto.

En este punto, es importante mencionar que la Corte recalcó que existe una imprecisión en las traducciones del texto del artículo II del Pacto; español, francés, inglés y portugués, ya que en el texto en francés se “refiere a la opinión de *una* de las partes”¹⁶⁴, es decir, la palabra *opinión* es la que se encuentra en discusión puesto que es un término muy subjetivo y no está claro sobre si debe ser la opinión o una o de las dos partes; es por esto que, la Corte se vio en la necesidad de analizar las relaciones diplomáticas de las partes sobre el caso en estudio a fin de determinar las intenciones de los Estados para solucionar ésta controversia y determinar si se agotó o no las negociaciones directas antes de la solicitud presentada por Nicaragua ante la Corte.

¹⁶² Tratado Americano de Soluciones Pacíficas “Pacto de Bogotá”, artículo II.

¹⁶³ Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, Pág. 249.

¹⁶⁴ *Ibíd.*

La Corte procedió a analizar la opinión de las Partes a través de la profundización en la evolución de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Honduras y manifestó que en el año 1981 y 1982 las Partes efectuaron intercambios bilaterales en varios niveles, incluyendo el de Jefes de Estado. Un ejemplo claro es el encuentro binacional que se dio con el proceso de Contadora en donde se presentó a los estados centroamericanos el “Acta de Contadora para la paz y la cooperación en Centroamérica” realizado el 12 y 13 de septiembre de 1985, sin embargo, ningún estado centroamericano aceptó en su totalidad este proyecto y las negociaciones continuaron hasta junio de 1986¹⁶⁵.

Es importante resaltar que el proceso denominado Contadora se concentró en realizar consultas y negociaciones que se organizaron y se llevaron a cabo en el marco de la mediación, en donde Honduras participó activamente, y terceros estados trataron de acercar los puntos de vista de los Estados en conflicto haciéndoles propuestas concretas sobre temas relacionados a conflictos de ésta Región. Por tanto, Honduras no podía alegar, en este caso, que para la fecha del litigio con Nicaragua existían negociaciones directas pendientes a través de los medios diplomáticos usuales¹⁶⁶.

En esta etapa del proceso, para que la Corte pueda declarar la admisibilidad o no del caso, no es necesario ser totalmente precisos en las declaraciones que se realicen sino que basta con proporcionar a los magistrados de la Corte una idea clara a través de los escritos y las audiencias orales de la naturaleza del reclamo realizado, en este caso, en la aplicación presentada por Nicaragua; para que la Corte Internacional de Justicia pueda decidir si es competente para analizar el fondo de la controversia y si la aplicación es admisible; tal es así que, frente a esta excepción la Corte contestó diciendo que dicho argumento no es un obstáculo para la admisibilidad de la solicitud realizada por Nicaragua.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Corte Internacional de Justicia, Acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua y Honduras) Jurisdicción y admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Reportes 1988, Pág. 33. En concordancia con Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, Pág. 249 y 250.

¹⁶⁶ Corte Internacional de Justicia, Acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua y Honduras) Jurisdicción y admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Reportes 1988, Pág. 34.

¹⁶⁷ *Ibíd.*, Pág. 34.

4. Pacto de Bogotá, artículo IV

Por último, Honduras argumentó diciendo que al aceptar el Grupo de Contadora como un *procedimiento especial* en el sentido del artículo II del Pacto de Bogotá, Nicaragua ha violado el artículo IV del mismo Pacto; y manifiesta que:

Habiendo aceptado el proceso de Contadora como un “procedimiento especial” en el sentido del artículo II del Pacto de Bogotá, Nicaragua no puede valerse del artículo IV¹⁶⁸ de ese Pacto ni, por consideraciones elementales de buena fe, puede iniciar cualquier otro procedimiento de arreglo pacífico hasta que haya concluido el proceso de Contadora; y ese momento no ha llegado aún¹⁶⁹.

Al respecto, la Corte argumentó que no es necesario que los procesos anteriores hayan terminado sino que los mismos hayan llegado a un **punto muerto**, sin perspectivas de continuación o renovación; es por esto que, según la Corte, los acontecimientos ocurridos en junio y julio de 1986 constituyen la terminación del Proceso de Contadora, es decir, que el proceso estaba en un punto muerto en la fecha en que Nicaragua presentó su solicitud. Además, considera que a pesar de haber sido adoptado por cinco estados centroamericanos el Acuerdo Esquipulas II en agosto de 1987, posteriormente, se puso en marcha el procedimiento denominado Contadora – Esquipulas II, sin embargo, éste proceso es diferente al proceso anterior, ya que difiere en el objeto y en la naturaleza del mismo¹⁷⁰. Por tanto, las alegaciones de Honduras basadas en el artículo IV del Pacto deben rechazarse, y no es necesario que la Corte determine si el proceso de Contadora era un “procedimiento especial” o un “procedimiento pacífico” a los efectos de los artículos II y IV del Pacto ni si ese procedimiento tenía el mismo objeto que el sustanciado ahora ante la Corte¹⁷¹. Es así que, el conflicto entre Nicaragua y Honduras no es un procedimiento especial según el Artículo II del Pacto de Bogotá.

¹⁶⁸ Pacto de Bogotá, el artículo IV dice: *Iniciado uno de los procedimientos pacíficos, sea por acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un pacto anterior, no podrá incoarse otro procedimiento antes de terminar aquél.*

¹⁶⁹ Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, Pág. 250. En concordancia con Corte Internacional de Justicia, Acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua y Honduras) Jurisdicción y admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Reportes 1988, p. 69. Pág. 34 y 35.

¹⁷⁰ Corte Internacional de Justicia, Acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua y Honduras) Jurisdicción y admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Reportes 1988, Pág. 39.

¹⁷¹ *Ibíd.*, Pág. 40.

Al respecto, el juez Schwebel en su opinión separada manifiesta que tiene dudas sobre la aplicación de los artículos II y IV del Pacto de Bogotá y enfatiza que al principio parece que la aplicación es inadmisibile por estar relacionada al caso Contadora, pero ese proceso no es un *procedimiento pacífico* establecido por el Pacto, por tanto es un *procedimiento especial*, el cual ha sido aceptado de esta manera por Honduras y Nicaragua. Por otro lado, el proceso de Contadora es un *procedimiento pacífico* que se ha iniciado por acuerdo de las partes, antes de la interposición de la solicitud presentada por Nicaragua, y ningún otro procedimiento se podrá iniciar hasta que éste concluya¹⁷².

Con todo esto, la Corte en su sentencia publicada el 20 de diciembre de 1988 declara que la tercera y la cuarta excepción de admisibilidad interpuesta por Honduras deben ser rechazadas¹⁷³; y, concluye diciendo:

Traducido al español

*La Corte concluye que tiene competencia para conocer el presente caso en virtud del artículo XXXI del Pacto de Bogotá, y que la demanda presentada por Nicaragua el 28 de Julio de 1986 es admisible.*¹⁷⁴

Al respecto, el juez Lachs manifestó en su opinión separada la importancia de las decisiones procesales realizadas por la Corte y asegura que las partes conservan su libertad de acción a fin de que éstas encuentren la solución para sus controversias¹⁷⁵; mientras que el juez Schwebel manifestó sus reservas por el carácter de “serial” de las solicitudes presentadas por Nicaragua en contra de Estados Unidos en 1984, en contra de Honduras y de Costa Rica en 1986; además expresó que la Corte tiene jurisdicción en el caso de acuerdo al artículo XXXI del Pacto de Bogotá¹⁷⁶.

¹⁷² Corte Internacional de Justicia, Opinión Separada del Juez Schwebel, Pág. 61.

¹⁷³ Corte Internacional de Justicia, Acciones armadas fronterizas y transfronterizas (Nicaragua y Honduras) Jurisdicción y admisibilidad, Sentencia, I.C.J. Reportes 1988, Pág. 41.

¹⁷⁴ Ibíd. Pág. 42.

¹⁷⁵ Corte Internacional de Justicia, Opinión Separada del Juez Lachs, Pág. 1 en concordancia con Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, Pág. 251.

¹⁷⁶ Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Naciones Unidas, Nueva York, 1992, Pág. 251.

4. Conclusiones

Es importante destacar que las Naciones Unidas consideró como órgano principal a la Corte Internacional de Justicia y otorgó, entre sus varias atribuciones, la función de solucionar los conflictos que se den entre Naciones a través de arreglos pacíficos a fin de evitar que se produzcan encuentros bélicos innecesarios.

La Corte posee competencia general, es decir, *ratione materiae* y universal, es decir, *ratione personae*, tal es así que se encarga de resolver controversias sobre “*todos los litigios que las partes le someten*”, según el artículo 36 párrafo 1 del Estatuto de la Corte¹⁷⁷; además, es muy importante tener en cuenta que, en caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, es este mismo órgano internacional el que tiene la facultad de decidir sobre sí mismo, lo cual significa que está autorizada por las Naciones Unidas a través de su Estatuto para emitir su criterio de forma independiente.

Por otro lado, es importante destacar que Nicaragua y Honduras son considerados miembros originales por haber presentado sus declaraciones de aceptación por primera vez el 6 de junio de 1986 y el 24 de septiembre de 1929, respectivamente, a la par con otros Estados que igualmente aceptaron la competencia del Tribunal Permanente de Justicia Internacional (primer órgano político internacional creado por el Pacto de la Sociedad de Naciones), y que pasaron a formar parte de la Corte Internacional de Justicia, luego de la Segunda Guerra Mundial.

Vale la pena mencionar que la Corte Internacional de Justicia emplea los términos de jurisdicción y competencia como si fueran sinónimos, ya que no hace distinción alguna entre estas dos palabras, al contrario las utiliza de tal manera que se encuentran estrechamente relacionadas; así también, podemos determinar que la Corte Internacional de Justicia pertenece a la esfera extraterritorial en donde los Estados, sin dejar de lado su soberanía, interactúan con otros estados y organismos no gubernamentales en igualdad de condiciones.

¹⁷⁷ José A. Pastor Ridruejo, Curso de Derecho Internacional Público y organizaciones internacionales, Ed. Technos, 7ma. Edición, España, 2000, pág. 608.

En repetidas ocasiones la Corte Internacional de Justicia ha manifestado su decisión de declararse competente de tratar controversias que han sido sometidas por los Estados aceptantes, así como ha declarado de admisibles las solicitudes en donde se presentan dichos conflictos por considerar que no hay incompatibilidades y que existe coherencia entre los hechos narrados y el derecho fundamentado en la aplicación.

En cuanto al caso en estudio, Honduras argumentó la no competencia de la Corte Internacional de Justicia para analizar el caso presentado por Nicaragua relacionado a los conflictos armados ocurridos en su frontera en común, debido a una modificación a la Declaración de Aceptación del artículo 36 párrafo 2 realizada el 20 de febrero de 1960, modificación que no fue aceptada por la Corte, ya que, no había sido puesta en conocimiento de la comunidad internacional siguiendo el procedimiento establecido; además, Nicaragua manifestó que en 1950 Honduras ratificó el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas también llamado “Pacto de Bogotá” sin ninguna reserva, aceptando ampliamente la jurisdicción de la Corte a través del artículo XXXI del mencionado Pacto, en donde se refiere a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto de la Corte.

Por tanto, es a través del Pacto de Bogotá que la Corte declara ser competente para conocer la controversia entre estos Estados aceptantes, es decir, entre Nicaragua y Honduras.

Es importante manifestar que para que la Corte pueda analizar y posteriormente juzgar una controversia interpuesta por alguno de los Estados aceptantes es necesario que ambas partes hayan expresado su consentimiento para aceptar la jurisdicción de la Corte, este consentimiento se lo puede hacer a través de varias formas, tales como: la declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte presentado ante el Secretario General de las Naciones Unidas, o a través del artículo 36 del Estatuto de la Corte y todos sus numerales o con la aceptación de tratados binacionales o multilaterales tales como el Pacto de Bogotá.

El consentimiento se lo puede hacer *a priori* o *a posteriori*, sea cual fuere la forma de manifestación de este consentimiento, es necesario que lo expresen los Estados partes a fin de que la Corte se encuentre facultada para realizar su labor.

Como conclusión al caso en estudio, la Corte Internacional de Justicia confirmó que la declaración de Honduras de 1986 no es válida ni tiene efectos legales, también afirmó que los artículos XXXI y XXXII son dos formas distintas de acceso a la competencia de la Corte, así como también mencionó que el artículo XXXI del Pacto de Bogotá es independiente de las declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria que se hayan hecho a través del artículo 36 numeral 2 del Estatuto de la Corte.

En cuanto a las excepciones presentadas por Honduras sobre la admisibilidad de la aplicación interpuesta por Nicaragua, la Corte las rechazó por carecer de fundamentos válidos, así como destacó una imprecisión en la normativa de la Corte entre las traducciones del texto en inglés, francés, portugués y español puesto que produce confusión al momento de determinar si existe o no un punto muerto o si las partes pueden establecer la terminación de las negociaciones directas, antes de presentar su solicitud de controversia ante la Corte; por ser un requisito previo para la competencia de la misma.

Es por esto que, la Corte en el caso *“Conflictos Armados Fronterizos y Transfronterizos entre Nicaragua y Honduras”*, declaró que no es un procedimiento especial según el Artículo II del Pacto de Bogotá ni tiene el mismo objeto y naturaleza del proceso Contadora Esquipulas II, por tanto la Corte decidió rechazar estas excepciones.

5. Bibliografía

Libros:

- Alzate Donoso Fernando, Teoría y Práctica de las Naciones Unidas, Colombia, Ed. Temis, 1997
- Brotons Antonio Remiro y otros, Derecho Internacional, Madrid, Ed. McGraw Hill, 1997
- Cabanellas de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Argentina, Editorial Heliasta, Decimosexta edición, 2003
- Díez de Velasco Manuel, Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, Editorial Tecnos, 1997
- Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo III; Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1967
- Eyffinger Arthur, The International Court of Justice, Netherlands, Dinamarca, Kluwerlaw International, 1995
- Gonzales Campos Julio y otros, Curso de Derecho Internacional Público, España, Editorial Civitas, 1998
- Guerrero Verdejo Sergio, Los Tratados como Fuente de Derecho, Aragón, Plaza y Valdés, Universidad Nacional Autónoma de México. Textos de Ciencias Políticas N° 13
- Herdegen Matthias, Derecho Internacional Público, Universidad Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Jurídicas, Fundación Konrad Adenauer, México, 1 era. Edición, 2005
- Lawrence Ziring Robert, Riggs Jack Plano, The United Nations International Organization and World Politics, United States, Wadsworth Thomson Learning, 2000
- Merrills J. G., International Dispute Settlement, New York, Cambridge University Press, Fourth Edition, 2008
- Núñez Solo Orlando, Cardenal Gloria, La Guerra en Nicaragua, Nicaragua, Ed. El Amanecer S.A., 1991
- Pastor Ridruejo José Antonio, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales, Madrid, Editorial Tecnos, 1980.

- Rodríguez Rodríguez Diego Fernando, Tesis Jurisdicción y Competencia de la Corte Penal Internacional, Facultad de Jurisprudencia, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 2002
- Salvador Crespo Íñigo, Tendencias en los litigios entre estados de Iberoamérica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en Anuario IHLADI, No. 19, 2010.

Documentos:

- Carta de las Naciones Unidas
- Corte Internacional de Justicia, Case concerning border and transborder armed actions (Nicaragua v. Honduras) – application instituting proceedings submitted by the Government of Nicaragua, Volume I, Application; Memorial; Counter-Memorial.
- Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
- Reglamento de la Corte Internacional de Justicia
- International Court of Justice, Separate Opinion of Judge Lachs
- International Court of Justice, Separate Opinion of Judge Oda
- International Court of Justice, Separate Opinion of Judge Schwebel
- International Court of Justice, Separate Opinion of Judge Shahabuddeen
- Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá

Internet:

- Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 1989 a 31 de julio de 1990, Documentos oficiales: Cuadragésimo Quinto Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/45/4), Nueva York, 1990. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010
- Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 1990 a 31 de julio de 1991, Documentos oficiales: Cuadragésimo Sexto Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/46/4), Nueva York, 1991. Pág. 21 Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010
- Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 1991 a 31 de julio de 1992, Documentos oficiales: Cuadragésimo Séptimo Período de

Sesiones Suplemento N° 4 (A/47/4), Nueva York, 1992. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010

- Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 1999 a 31 de julio de 2000, Documentos oficiales: Quincuagésimo Quinto Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/55/4), Nueva York, 2000. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010
- Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 2001 a 31 de julio de 2002, Documentos oficiales: Quincuagésimo Séptimo Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/57/4), Nueva York, 2002. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010
- Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 2002 a 31 de julio de 2003, Documentos oficiales: Quincuagésimo Octavo Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/58/4), Nueva York, 2003. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010
- Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 2003 a 31 de julio de 2004, Documentos oficiales: Quincuagésimo Noveno Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/59/4), Nueva York, 2004. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010
- Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 2004 a 31 de julio de 2005, Documentos oficiales: Sexagésimo Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/60/4), Nueva York, 2005. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010
- Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 2005 a 31 de julio de 2006, Documentos oficiales: Sexagésimo Primer Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/61/4), Nueva York, 2006. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010
- Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 2006 a 31 de julio de 2007, Documentos oficiales: Sexagésimo Segundo Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/62/4), Nueva York, 2007. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010
- Asamblea General, Informe de la Corte Internacional de Justicia – 1° de agosto de 2007 a 31 de julio de 2008, Documentos oficiales: Sexagésimo Tercer Período de Sesiones Suplemento N° 4 (A/63/4), Nueva York, 2008. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010

- Asamblea General, Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante el 29° período de sesiones – Resolución 3314 (XXIX) sobre la base de los informes de la Sexta Comisión, 2319ª. Sesión Plenaria – 14 de diciembre de 1974, Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, Internet: www.un.org Acceso: 7 de noviembre de 2010
- Corte Internacional de Justicia, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Naciones Unidas, Nueva York, 1992
- Corte Internacional de Justicia, Sentencia CIJ (24 de mayo de 1980) Rehenes diplomáticos en Teherán – Estados Unidos con Irán.
- Documento presentado por el Embajador Carlos Arguello, agente de la República de Nicaragua, Counter-Memorial of Nicaragua (Jurisdiction and Admissibility) Border and Transborder Armed Actions, 22 de junio de 1987
- General Assembly, Report of the International Court of Justice – 1 August 2008-31 July 2009, Official Records: Sixty-fourth Session Supplement N° 4, New York, 2009. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010
- General Assembly, Report of the International Court of Justice – 1 August 2009-31 July 2010, Official Records: Sixty-Fifth Session Supplement N° 4, New York, 2010. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010
- International Court of Justice, Case Concerning Border And Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras) – Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application 20 December 1988, Reports 1988, Pág. 69, General List N° 74, Year 1988
- International Court of Justice, Certain expenses of the United Nations – Advisory Opinion of 20 July 1962, I.C.J. Reports 1962.
- International Court of Justice, Jurisdiction – States Entitled to Appear before the Court – Declarations Recognizing as Compulsory the Jurisdiction of the Court – Honduras, Nueva York. Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010
- International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory opinions and orders – Case concerning Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1988
- Jorge Antonio Quindimil López, Las normas de ius cogens y el consentimiento de los Estados ante la Corte Internacional de Justicia: ¿Hacia un nuevo fundamento de jurisdicción? (Comentarios sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 3 de febrero de 2006, Actividades Armadas sobre el territorio del Congo, República Democrática del Congo contra Ruanda, nueva demanda de 2002, Revista Electrónica

de Estudios Internacionales, número 12, 2006, Internet: www.reei.org Acceso: 9 de mayo de 2009

- Naciones Unidas, Historia de las Naciones Unidas - Conferencia de San Francisco, Internet: www.un.org Acceso: 10 de octubre de 2010
- Naciones Unidas, Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991, Nueva York, Publicación de las Naciones Unidas, Número de venta: S.92.V.5, 1992 Internet: www.icj-cij.org. Acceso: 2 de noviembre de 2010.
- Ocaña Juan Carlos, Mandatos de la Sociedad de Naciones. Internet. www.historiasiglo20.org Acceso: 11 de octubre de 2010.
- Organización de los Estados Americanos, Departamento de Derecho Internacional – Tratados Multilaterales, Washington DC. Internet: www.oas.org Acceso: 19 de noviembre de 2010
- Ortiz de Zárate Roberto, Biografías de Líderes Políticos – José Daniel Ortega Saavedra. Internet: www.cidob.org. Acceso: 1 de noviembre de 2010.